TEST A2

EDICIÓN 2026

Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos

Universidad Complutense de Madrid

Bloque I: Derecho Administrativo

Más de 650 Preguntas

665 de exámenes oficiales + 15 de refuerzo, marcadas

- Cada solución cita el artículo y la ley que la sustentan

6	100	2	274
de los 45 temas del programa oficial	preguntas de prueba de nivel	simulacros de examen	páginas

oposicionesexpress.com

Preguntas de procesos selectivos reales
Programa oficial de la convocatoria (BOCM)
Edición noviembre de 2026

Esto es una muestra

Tiene 59 páginas: el índice, cómo se ha hecho el libro, cómo usarlo y los tests de los temas 1 y 2 enteros, con sus soluciones. El libro completo, de 274 páginas, sigue tema a tema el **programa oficial de la convocatoria de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Complutense de Madrid** (solo «Bloque I: Derecho Administrativo»: 6 de los 45 temas del programa).

El libro entero

34,90 €

PDF de 274 páginas: 680 preguntas con su solución explicada.

Con el temario en formato ley

44,90 € los dos

Este libro y el temario de la convocatoria (la ley de 6 de los 45 temas; PDF de 126 páginas): dos PDF en un solo pago. **Ver los dos**

Pago único, impuestos incluidos. Se descarga al momento.

Consigue el libro completo

Escanea el código o pulsa la dirección: te lleva a la página del libro en oposicionesexpress.com, donde lo compras y lo descargas al momento en PDF.

oposicionesexpress.com/Test-Escala-de-Ayudantes-de-Archivos-Bibliotecas-y-Museos-Universidad-Complutense-de-Madrid-A2.html

Precios a 17 de noviembre de 2026: si cambian, vale el que figure en la página de venta.

Índice

6 temas · 680 preguntas

Créditos y aviso legal 3

De dónde sale este libro 4

Cómo usar este libro 5

Prueba tu nivel 6

PARTE 1 · Test por temas 45

Tema 1 La Constitución Española de 1978. 46

Tema 2 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Título preliminar. Capítulo II. Patrimonio de las Administraciones Públicas. Título I. Adquisición de bienes y derechos: Modos de adquirir, Adquisiciones a título oneroso, Normas especiales para las adquisiciones hereditarias, Adquisiciones a título gratuito. Título II. Protección y defensa del patrimonio. Capítulo I. De la obligación de proteger y defender el patrimonio. Capítulo II De las limitaciones a la disponibilidad de los bienes y derechos. Capítulo V. De las facultades y prerrogativas para la defensa de los patrimonios públicos. Título III. De los bienes y derechos públicos. Capítulo I. Afectación, desafectación y mutación de destino de los bienes y derechos. 82

Tema 3 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres: Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Título II: Políticas públicas para la igualdad. Título V: El principio de igualdad en el empleo público. 97

Tema 4 Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Capítulo I. Disposiciones generales. Título II. Defensa y promoción del derecho a la igualdad de trato y no discriminación. Título IV. Infracciones y sanciones en materia de igualdad de trato y no discriminación. 137

Tema 5 Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Título Preliminar. Disposiciones generales. Título I. Actuación de los poderes públicos. Capítulo II. Políticas públicas para promover la igualdad efectiva de las personas LGTBI. Sección 2.ª Medidas en el ámbito administrativo. Sección 3.ª Medidas en el ámbito laboral. Sección 5.ª Medidas en el ámbito de la educación. Sección 6.ª Medidas en el ámbito de la cultura, el ocio y el deporte. 146

Tema 6 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Título I. Disposiciones generales. Título II. Principios de protección de datos. Título III. Derechos de las personas. Título V. Responsable y encargado del tratamiento. Título VIII. Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos. Título IX. Régimen sancionador. Título X. Garantía de los derechos digitales. 155

PARTE 2 · Simulacros de examen 196

Simulacro 1 100 preguntas 197

Simulacro 2 100 preguntas 234

Anexo: vigencia de los textos 274

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

Créditos y aviso legal

Edición noviembre de 2026

© 2026 oposicionesexpress.com. Todos los derechos reservados. La selección de preguntas, la estructura de tests, las soluciones anotadas y la maquetación de esta obra están protegidas por la legislación de propiedad intelectual.

Licencia de uso personal. Tu compra concede una licencia de uso personal e intransferible. No está permitida la reproducción total o parcial, la distribución, la comunicación pública, la cesión ni la reventa de este archivo sin autorización escrita del titular. Sí puedes fotocopiar para tu propio uso las hojas de respuestas.

Sin carácter oficial ni afiliación. Material de estudio independiente. No es una publicación oficial ni está afiliado, avalado o patrocinado por la Universidad Complutense de Madrid, por ninguna otra Administración Pública, tribunal u organismo convocante, ni por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

Alcance. Este libro sigue el programa oficial de la convocatoria de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Complutense de Madrid, publicada en el BOCM. Cubre solo «Bloque I: Derecho Administrativo»: 6 de los 45 temas del programa. Las bases pueden modificarse: contrasta siempre la publicación oficial.

Procedencia de las preguntas. Las preguntas de examen proceden de procesos selectivos reales convocados por Administraciones Públicas españolas; cada una indica su organismo convocante y, cuando consta, el año. Proceden de muchos organismos, no solo de la Universidad Complutense de Madrid.

Preguntas de refuerzo. Las 15 preguntas marcadas «Refuerzo» las ha elaborado haztefuncionario.com a partir del artículo que citan, y solo aparecen en los temas del programa sin preguntas de examen suficientes.

Resultados. Esta obra es una herramienta de preparación; el resultado depende de tu estudio y constancia.

Erratas. Si detectas un error en una pregunta o en una solución, escríbenos a oposiciones.dhm@gmail.com y lo corregimos en la siguiente actualización.

> **Actualizaciones de este libro**
>
> oposicionesexpress.com/Test-Escala-de-Ayudantes-de-Archivos-Bibliotecas-y-Museos-Universidad-Complutense-de-Madrid-A2.html

De dónde sale este libro

Este libro sigue, tema a tema, el **programa oficial de la convocatoria de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Complutense de Madrid**, publicada en el BOCM. Cubre solo «Bloque I: Derecho Administrativo»: 6 de los 45 temas del programa. Cada tema que trae tiene su test, y todo el libro se apoya en preguntas que ya se han puesto en exámenes.

Las **665 preguntas de examen** de este libro proceden de procesos selectivos reales convocados por Administraciones Públicas españolas. Cada una indica su procedencia: el organismo convocante y, cuando consta, el año. Proceden de muchos organismos distintos, no solo de la Universidad Complutense de Madrid: son las que tratan las normas y materias de tu programa.

Cómo se ha elegido cada pregunta

1. **Pertenencia al tema.** Partimos de las 7.277 preguntas reales que haztefuncionario.com tiene enlazadas a los 6 temas de este programa que trae el libro, por la ley y los artículos que cubre cada tema.
2. **Filtros mecánicos.** Solo entran preguntas con sus 4 opciones completas, en castellano, sin duplicados y sin textos que desvelen la respuesta.
3. **Piso de fiabilidad.** Cada pregunta real lleva una nota interna de fiabilidad de su clave; las que no llegan al umbral se descartan, aunque el test quede más difícil de llenar.
4. **Artículo vigente.** Si una pregunta cita un artículo que hoy está derogado o ya no existe en el texto de la norma, no entra.
5. **Lo que más cae, primero.** Dentro de cada tema, cada artículo aporta preguntas en proporción a las veces que ha caído. Los temas más preguntados llevan hasta 100 preguntas; los que menos, 20.

Las preguntas de refuerzo

En 2 temas del programa no hay preguntas reales suficientes. Para que no se queden sin test, se completan con **15 preguntas de refuerzo**: las ha elaborado haztefuncionario.com a partir del artículo que citan, y pasan los mismos filtros mecánicos que las reales. Van siempre marcadas como «Refuerzo» y no entran en la prueba de nivel ni en los simulacros.

Qué encontrarás

Parte	Qué es
Prueba tu nivel	100 preguntas en 120 minutos, como el examen de esta convocatoria. Hazla antes de empezar: los temas de las que falles son tu mapa de estudio.
Parte 1 · 6 tests por tema	En el orden del programa oficial, con sus soluciones a continuación y una casilla de aciertos en cada una.
Parte 2 · 2 simulacros	Con el número de preguntas y el tiempo del examen de esta convocatoria.
Anexo de vigencia	Las normas del libro y de dónde se ha tomado su texto.

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

Cómo usar este libro

El examen de esta convocatoria

100	120	4	−1/4	10
preguntas + 10 de reserva	minutos	opciones por pregunta	de acierto por cada error	sobre 20 para superarlo

Formato tomado de las bases de la convocatoria. Compruébalo siempre en la publicación oficial: puede modificarse. Dejar una pregunta en blanco no penaliza.

El orden que funciona

1. **Empieza por «Prueba tu nivel»**, sin apuntes y con el reloj en marcha. Corrígela y anota en qué temas fallas (cada solución dice su tema): ese es tu mapa de estudio.
2. **Trabaja los tests por tema**, empezando por tus temas débiles. Corrige con la clave rápida que abre cada página de soluciones y lee después las explicaciones.
3. **Reserva los simulacros para el final**, cronometrados y del tirón: tienen el número de preguntas y el tiempo del examen de esta convocatoria.
4. **Repite lo fallado**, un test con 1 de cada 4 respuestas falladas merece segunda vuelta antes de avanzar. Apunta los aciertos de cada vuelta en la casilla que abre las soluciones del tema.

> **Cómo se hace cada test**
>
> Escribe tu respuesta en la **casilla que hay junto a cada pregunta**. Las soluciones empiezan siempre en página nueva, así que no las ves mientras haces el test. Cuando termines, corrige con la clave rápida y apunta los aciertos.

Qué cubre y qué no

Cubre solo «Bloque I: Derecho Administrativo»: 6 de los 45 temas del programa. No incluye «Bloque II: Biblioteconomía» (16 temas), «Bloque III: Documentación y Tecnologías de la Información» (14 temas) ni «Bloque IV: Legislación» (9 temas). No incluye teoría: es material de entrenamiento. Contrasta siempre el temario y las bases en la publicación oficial de tu convocatoria.

La versión en pantalla

Las mismas preguntas, con corrección al instante y repaso de falladas, están en haztefuncionario.com, en la página de esta oposición.

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

Parte 1

Test por temas

6
tests, uno por tema

380
preguntas

365
reales de examen

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €**

Cómpralo aquí ›

Tema
1

La Constitución Española de 1978.

100	100	0	120
preguntas en este test	reales de examen	de refuerzo	minutos recomendados

Estas preguntas salen de 61 organismos distintos y de exámenes de 2018 a 2026.

Escribe tu respuesta en la casilla que hay junto a cada pregunta. Las soluciones empiezan en página nueva: no las verás mientras haces el test.

1 **España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico:**

A La libertad, la justicia, la enseñanza y la sanidad.
B La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
C La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo social.
D La libertad, la justicia, la igualdad y la soberanía nacional.

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2024 · Arquitecto (A1)

2 **¿La autonomía local reconocida por la Constitución implica potestad legislativa?**

A Sí, en todo caso.
B No, aunque podrá suponerla.
C Sí, y para las Comunidades Autónomas también.
D No, en ningún caso.

Ayuntamiento de Lopera, 2022 · Administrativo (C1)

3 **Cuando el artículo 1.3 de la Constitución alude a la Monarquía parlamentaria del Estado español se refiere**

A Ninguna de las demás respuestas es correcta
B La clase de soberanía,
C La forma de estado.
D La forma de gobierno.

Ayuntamiento de Serra · Policía Local (C1)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas 34,90 €
Cómpralo aquí ›

4 **Atendiendo a lo previsto en el artículo 149 de la Constitución Española, indique cuál de las siguientes respuestas se corresponde con una materia cuya competencia es exclusiva del estado:**

- **A** La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la agricultura, la caza y la pesca fluvial.
- **B** La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
- **C** Los montes y aprovechamientos forestales.
- **D** La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

Ayuntamiento de Guillena, 2026 · Técnico de Recursos Humanos (A2)

5 **No está garantizado por la Constitución el principio de:**

- **A** Jerarquía normativa
- **B** Retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales
- **C** La responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos
- **D** Publicidad de las normas

Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, 2019 · Administrativo

6 **El Estado Social de Derecho:**

- **A** Garantiza únicamente derechos civiles.
- **B** Alude a una intervención estatal en la sociedad y en la economía para ponerla al servicio de los objetivos de igualdad y justicia, esto es, que los derechos recogidos en el ordenamiento jurídico pueden ser ejercidos de forma efectiva por la población.
- **C** Es un estado abstencionista.
- **D** Es incompatible con la monarquía parlamentaria.

Ayuntamiento de Mogán · Educador Social (A2)

7 **¿De cuál de las siguientes libertades y derechos reconocidos en la Constitución Española cualquier ciudadano podrá recabar su tutela ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad?**

- **A** Objeción de conciencia.
- **B** Libertad sindical.
- **C** Derecho a la propiedad privada.
- **D** Todas las respuestas anteriores son correctas.

Junta de Andalucía, 2021 · Administrativo (C1)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

8 **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?:**

- **A** Los municipios gozarán de personalidad jurídica plena.
- **B** El gobierno y administración de los municipios corresponde a sus respectivos ayuntamientos.
- **C** Los concejales serán elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida en su propio reglamento.
- **D** Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos.

Diputación Provincial de Huesca, 2021 · Administrativo (C1)

9 **¿Qué mayoría exige la Constitución Española para la ley de aprobación de un Estatuto de Autonomía?**

- **A** Mayoría absoluta del Congreso, para los Estatutos de Autonomía de las Comunidades históricas y mayoría simple para los restantes.
- **B** Mayoría simple del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto, al tratarse de una ley ordinaria.
- **C** Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto, al tratarse de una ley orgánica.
- **D** Mayoría simple del Congreso y mayoría absoluta del Senado.

Ayuntamiento de Santander, 2023 · Administrativo (C1)

10 **De las siguientes afirmaciones señale la correcta en relación con el procedimiento de "habeas corpus", regulado en el artículo 17.4 de la Constitución Española:**

- **A** Impide que la detención de una persona se prolongue más de 72 horas.
- **B** Garantiza al detenido la asistencia de abogado en las diligencias policiales.
- **C** Produce la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.
- **D** Posibilita que la persona detenida no sea obligada a declarar.

Ayuntamiento de Cádiz, 2023 · Policía Local (C1)

11 **Las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en las siguientes materias (señale la incorrecta):**

- **A** Relaciones internacionales.
- **B** Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- **C** Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
- **D** El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.

Ayuntamiento de Antequera, 2020 · Administrativo (C1)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

12 **Según el artículo 62 de la Constitución Española de 1978, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde al Rey en los términos expresamente previstos por dicho precepto?**

- **A** Autorizar indultos generales mediante Real Decreto, a propuesta del Gobierno.
- **B** Ser informado de los asuntos de Estado y presidir las sesiones de las Cortes Generales.
- **C** El Alto Patronazgo de las Fuerzas Armadas.
- **D** Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, sin que esta pueda autorizar indultos generales.

Administración General del Estado, 2025 · Gestión de la Administración Civil del Estado (A2)

13 **Según la Constitución Española son fundamento del orden político y de la paz social: (señala la incorrecta):**

- **A** La dignidad de la persona
- **B** Los derechos inviolables que le son inherentes
- **C** El libre desarrollo de sus funciones
- **D** El respeto a la ley y a los derechos de los demás

Ayuntamiento de Cercedilla · Oficial de Aguas

14 **Según el artículo 68 CE, señala la respuesta correcta:**

- **A** Los Diputados son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que se establezca reglamentariamente.
- **B** La circunscripción electoral es la comarca.
- **C** La Ley distribuirá el número total de Diputados, asignado una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a su superficie.
- **D** La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.

Generalitat Valenciana, 2019 · C1

15 **¿Qué rango normativo se exige para la regulación del estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública, las peculiaridades de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones?**

- **A** Rango de ley.
- **B** Rango reglamentario.
- **C** Rango de ley para el acceso a la función pública, y rango reglamentario para la regulación del estatuto de los funcionarios públicos, las peculiaridades de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
- **D** Rango de ley para la regulación del estatuto de los funcionarios públicos y el acceso a la función pública, y rango reglamentario para el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Administración General del Estado, 2022 · Gestión de la Administración Civil del Estado (A2)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

16 **Según la Constitución de 1978 el Estado se organiza territorialmente en:**

A En municipios, provincias, comunidades autónomas e islas.

B En municipios, provincias, comunidades autónomas y comarcas.

C En ayuntamientos, diputaciones provinciales y gobiernos autonómicos.

D Ninguna de las anteriores es correcta.

Ayuntamiento de Alcañiz, 2026

17 **Según lo contenido en la Constitución, Título VIII, relativo a la Organización Territorial del Estado, señale la respuesta incorrecta:**

A La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena

B En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos

C No se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia

D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Ayuntamiento de Madrid, 2025 · Policía Local (C1)

18 **Según el Título I, Capítulo Cuarto, "De las garantías de las libertades y derechos fundamentales" de la Constitución Española de 1978, señale la opción correcta:**

A Los derechos y libertades reconocidos no vinculan a todas las Administraciones Públicas.

B Sólo por ley orgánica podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades.

C Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo.

D El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero, informará la judicialización positiva, la práctica legislativa y la actuación de los poderes públicos.

Administración General del Estado, 2024 · Técnico Auxiliar de Informática (C1)

19 **Según lo dispuesto en el Título IX, del Tribunal Constitucional, de la Constitución Española de 1978, se establece que el mismo:**

A Se compone de 10 miembros nombrados por el presidente del Gobierno; de ellos, tres a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; tres a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

B Se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de dos tercios de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

C Se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

D Se compone de 10 miembros nombrados por el Rey; de ellos, tres a propuesta del Congreso por mayoría de dos tercios de sus miembros; tres a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Ayuntamiento de Tres Cantos, 2026 · Ayudante de Biblioteca (A2)

PARTE 1

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas 34,90 €

Cómpralo aquí ›

20 **El artículo 1, apartado 3, de la Constitución Española de 1978 establece la forma política del Estado español:**

- **A** La soberanía reside únicamente en la Corona.
- **B** España es un Estado en que la Monarquía convive con un sistema parlamentario.
- **C** España puede alternar entre monarquía y república según lo decida el parlamento.
- **D** Todas las respuestas anteriores son correctas.

Ayuntamiento de Pozoblanco, 2025 · Técnico de Administración General (A1)

21 **El artículo 9 de la Constitución de 1978 garantiza una serie de principios, indique cuál de los siguientes principios no estaría garantizado:**

- **A** La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
- **B** La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- **C** La seguridad jurídica y jerarquía normativa.
- **D** La publicidad de las normas.

Ayuntamiento de Alcañiz, 2026

22 **¿Sobre cuál de las siguientes materias tiene competencia exclusiva el Estado, de acuerdo con el artículo 149.1 de la Constitución de 1978?**

- **A** Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- **B** Asistencia social.
- **C** Marina mercante.
- **D** Pesca fluvial.

Administración General del Estado, 2025 · Gestión de la Administración Civil del Estado (A2)

23 **Respecto del Presidente del Gobierno establece la Constitución que… (señale la incorrecta):**

- **A** Dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.
- **B** Es elegido por el Congreso de los Diputados y el Senado, reunidos en sesión conjunta, a propuesta del Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria.
- **C** Propone al Rey el nombramiento y separación de los demás miembros del Gobierno.
- **D** Su responsabilidad criminal será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Ayuntamiento de Antequera, 2020 · Auxiliar Administrativo

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

24 **Los decretos-ley:**

- **A** Son normas con rango de ley que dicta el Gobierno previa delegación de las Cortes Generales en casos de extraordinaria y urgente necesidad.
- **B** Son normas con rango de ley que dicta el Gobierno en caso de una necesidad extraordinaria y urgente y que no deben ser posteriormente convalidadas por el Congreso de los Diputados.
- **C** Son normas reglamentarias que dicta el Gobierno en caso de una necesidad extraordinaria y urgente y que deben ser posteriormente convalidadas por el Congreso de los Diputados.
- **D** Son normas con rango de ley que dicta el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad y que deben ser posteriormente convalidadas o derogadas por el Congreso de los Diputados.

Ayuntamiento de La Roca del Vallès, 2025 · Técnico de Administración General (A1)

25 **Según el tenor literal del artículo 142 de la Constitución Española, las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y:**

- **A** Se nutrirán únicamente de tributos propios y de participación en los del Estado.
- **B** Se nutrirán fundamentalmente de tributos ajenos y propios.
- **C** Se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
- **D** Se nutrirán fundamentalmente de tributos ajenos, propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Ayuntamiento de Caspe · Tesorero

26 **Según la Constitución Española, es un derecho fundamental:**

- **A** El derecho a la protección de la salud.
- **B** El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
- **C** El derecho a la propiedad privada y a la herencia.
- **D** El derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios.

Universidad de Valladolid, 2018 · Auxiliar Administrativo (C2)

27 **El artículo 7 de la Constitución Española de 1978 establece que los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales:**

- **A** Contribuyen a la defensa y prevención de los intereses culturales y sociales que les son propios.
- **B** Su creación, pertenencia y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico.
- **C** Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
- **D** Todas las respuestas son correctas.

Ayuntamiento de Cádiz, 2026 · Auxiliar de Archivo y Biblioteca (C2)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

28 **¿Cuál de las siguientes respuestas NO se recoge bajo el epígrafe "De los derechos fundamentales y de las libertades públicas" regulados en la Sección I del Capítulo II del Título I de la Constitución Española?**

A La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos

B Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal

C Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales

D Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo

Gobierno de La Rioja, 2024 · Informático (A1)

29 **Señale la respuesta INCORRECTA:**

A Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo 81.

B La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando tenga por objeto la formación de textos articulados.

C La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley orgánica cuando se trate de refundir diversos textos legales en uno solo.

D Las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control, sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales.

Ayuntamiento de Roquetes, 2025 · Auxiliar Administrativo (C2)

30 **Según el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, la enseñanza básica es:**

A Obligatoria y gratuita.

B Voluntaria y gratuita.

C Obligatoria y de pago.

D Voluntaria y de pago.

Administración General del Estado, 2024 · Auxiliar Administrativo (C2)

31 **Según dispone el artículo 153 de la Constitución Española, el control de la actividad de la administración autónoma y sus normas reglamentarias se ejercerá:**

A Por el Tribunal Constitucional.

B Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado.

C Por la jurisdicción contencioso-administrativa.

D Por el Tribunal de Cuentas.

Administración General del Estado, 2025 · Agente de la Hacienda Pública (C1)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

32 **El artículo 73 de la Constitución Española establece que, anualmente, las cámaras se reunirán en dos períodos ordinarios de sesiones. Señale qué meses NO están incluidos en estos dos periodos.**

- A Los meses de diciembre, julio y agosto.
- B Los meses de enero, julio y agosto.
- C Los meses de junio, julio y agosto.
- D Los meses de julio, agosto y septiembre.

Gobierno de Aragón, 2022 · Administrativo (C1)

33 **Según el artículo 106 de la CE, NO está sujeta al control de los Tribunales:**

- A El sometimiento de la actuación administrativa a los fines que la justifican.
- B La legalidad de la actuación administrativa.
- C La potestad reglamentaria.
- D La constitucionalidad de los Decretos Legislativos.

Región de Murcia, 2021 · Administrador (A1)

34 **En caso de que no se hubiese aprobado la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 en el momento de inicio del expediente de contratación, ¿se podría aprobar el gasto necesario para contratar las obras?**

- A No se puede autorizar ningún gasto en tanto no se publique Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 en el Boletín Oficial del Estado.
- B Sí, ya que se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales de 2017 hasta la aprobación y publicación de los nuevos.
- C Sí, siempre que el Gobierno apruebe la prórroga de los presupuestos iniciales de 2017 hasta la aprobación y publicación de los nuevos.
- D Sí, siempre que se solicite autorización previa al Consejo de Ministros.

Administración General del Estado, 2018 · Administrativo (C1)

35 **El referéndum previsto en el artículo 167 de la Constitución**

- A Debe celebrarse en todo caso
- B Podría celebrarse si lo solicitan una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras
- C Podría celebrarse si lo solicitan una décima parte de los miembros de ambas Cámaras
- D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Cabildo Insular de El Hierro, 2018 · Auxiliar Administrativo (C2)

36 **Los Partidos Políticos:**

- A Son instrumento fundamental para la participación política.
- B Expresan el pluralismo platico en todos los campos.
- C Concurren a la formación de la voluntad institucional.
- D Participan en la manifestación de la voluntad de las agrupaciones políticas.

Ayuntamiento de Rojales, 2019 · Administrativo (C1)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

37 **¿En qué artículo de la Constitución Española se regula el siguiente derecho: "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social"?**

A Artículo 17.
B Artículo 15.
C Artículo 16.
D Artículo 14.

Ayuntamiento de Boimorto, 2022

38 **Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:**

A Bases de régimen minero y energético.
B Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
C Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.
D Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Ayuntamiento de La Vall d'Uixó, 2023 · Auxiliar Administrativo (C2)

39 **¿Cuál de las siguientes funciones NO corresponde al Rey, según el artículo 62 de la Constitución Española de 1978?**

A Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros.
B Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
C Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
D Autorizar la celebración de tratados internacionales que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.

Administración General del Estado, 2025 · Gestión de Sistemas e Informática (A2)

40 **Indique cuál de las siguientes afirmaciones está contenida literalmente en el artículo 140 de la Constitución:**

A La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de capacidad jurídica plena.
B Los concejales serán elegidos por los alcaldes o por los vecinos.
C Los alcaldes serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio popular, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley.
D Ninguna de las anteriores respuestas se ajusta a la literalidad de la norma.

Ayuntamiento de Fuengirola, 2020 · Administrativo (C1)

41 **Según la Constitución Española de 1978, ¿quién de los siguientes cargos puede ser nombrado Senador?**

A Un diputado del Congreso.
B Un miembro del Tribunal Constitucional.
C Un miembro de la Asamblea de Extremadura.
D Un militar profesional en activo.

Servicio Extremeño de Salud, 2026 · Auxiliar Administrativo (C2)

PARTE 1

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas 34,90 €
Cómpralo aquí ›

42 La celebración de una manifestación en lugares de tránsito público:

- A Se encuentra recogida en el artículo 22 de la Constitución.
- B Requerirá autorización previa del Subdelegado del Gobierno.
- C Podrá prohibirse cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
- D Todas las respuestas anteriores son correctas.

Ayuntamiento de Fuengirola, 2020 · Administrativo (C1)

43 ¿Cuál de los siguientes derechos no se encuentra regulado en el artículo 20 de la Constitución Española?:

- A El derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos.
- B El derecho de las personas físicas y jurídicas a crear centros docentes.
- C El derecho a recibir libremente información veraz.
- D El derecho a la libertad de cátedra.

Ayuntamiento de Paradela, 2025 · Administrativo (C1)

44 ¿Cuál de estas materias no se regula por Ley Orgánica?

- A Régimen electoral general.
- B Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
- C Marco en el que se crearán policías por las comunidades autónomas.
- D Abdicación del rey.

Ayuntamiento de Villamor de los Escuderos, 2024 · Ordenanza

45 Según lo dispuesto en el artículo 145 de la Constitución Española, la norma fundamental no prevé:

- A La federación de Comunidades Autónomas.
- B Un estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.
- C Sustituir la iniciativa de las Corporaciones Locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143 de la Constitución Española.
- D La constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143 de la Constitución Española.

Ayuntamiento de Cádiz, 2023 · Policía Local (C1)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

46 **El Título IV de la Constitución establece las funciones del Gobierno y de la Administración. Indique la afirmación INCORRECTA.**

A Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.

B El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.

C El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.

D La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Constitucional.

Gobierno de La Rioja, 2025 · Técnico de Laboratorio (A1)

47 **Según el artículo 31, apartado 2, de la Constitución española de 1978, el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de...**

A Estabilidad y equilibrio presupuestario.

B Eficiencia y economía.

C Estabilidad y sostenibilidad.

D Eficiencia y sostenibilidad.

Ayuntamiento de Yecla, 2026 · Auxiliar de Biblioteca (C2)

48 **De conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Constitución Española de 1978, (señale la falsa):**

A Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y por el Senado.

B Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.

C Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, controlan los Presupuestos, aprueban la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.

D Las Cortes Generales son inviolables.

Ayuntamiento de Tres Cantos, 2026 · Ayudante de Biblioteca (A2)

49 **¿Qué objeto tiene el procedimiento de "habeas corpus"? (art. 17 CE):**

A La inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente

B La inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida

C La inmediata puesta en libertad de toda persona detenida ilegalmente

D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Ayuntamiento de Utiel, 2022 · Técnico Auxiliar de Servicios Sociales

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

50 **En relación con el artículo 13 de la Constitución Española de 1978 (C.E.), y el sufragio de los extranjeros, es correcto:**

- **A** En ningún caso pueden votar en España.
- **B** Pueden votar y ser elegidos en elecciones municipales si así se establece mediante tratado o ley atendiendo al principio de reciprocidad.
- **C** Pueden votar en elecciones generales si así se establece por ley orgánica.
- **D** Pueden votar y ser elegidos en elecciones autonómicas y municipales atendiendo al principio de reciprocidad.

Ayuntamiento de Yecla, 2023 · Administrativo (C1)

51 **Señalar la respuesta INCORRECTA. Según establece el art. 78 de la Constitución Española de 1978:**

- **A** En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
- **B** Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.
- **C** Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.
- **D** Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.

Gobierno de La Rioja, 2022 · Fisioterapeuta (A2)

52 **Es un derecho público subjetivo:**

- **A** El derecho al honor y la intimidad.
- **B** El derecho a voto.
- **C** El derecho al divorcio.
- **D** El derecho de propiedad.

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2024 · Administración General (A1)

53 **El Tribunal Supremo:**

- **A** Es el órgano superior jerárquico del Tribunal Constitucional.
- **B** Es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes.
- **C** Es el órgano jurisdiccional superior en materia de garantías Constitucionales.
- **D** Es el órgano jurisdiccional superior en todos sus órdenes, salvo en materia de garantías Constitucionales

Ayuntamiento de Bueu, 2024 · Administrativo Jefe de Negociado

54 **De autonomía para la gestión de sus respectivos intereses:**

- **A** Solo gozan las Comunidades Autónomas
- **B** Pueden gozar de tal autonomía las comarcas
- **C** Gozan nada más que los municipios y las Comunidades Autónomas
- **D** Gozan de ella todas las entidades en las que el Estado se organiza territorialmente

Ayuntamiento de Bueu, 2024 · Administrativo Jefe de Negociado

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

55 **Los supuestos de suspensión o movilidad de los Jueces deben estar establecidos en un/una/la:**

- **A** Ley
- **B** Reglamento
- **C** Instrucción del Consejo General del Poder Judicial
- **D** Decreto dictado por el Consejo General del Poder Judicial

Ayuntamiento de El Ejido, 2023 · Policía Local (C1)

56 **Los decretos legislativos:**

- **A** Son disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada.
- **B** Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.
- **C** La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados.
- **D** Son normas reglamentarias dictadas por el Gobierno que carecen de rango de Ley.

Junta de Castilla y León, 2025 · Auxiliar Administrativo (C2)

57 **Señale la respuesta correcta de acuerdo con la CE:**

- **A** La cuestión de confianza planteada por el Presidente del Gobierno ante las Cortes Generales se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de cada Cámara.
- **B** El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
- **C** La cuestión de confianza planteada por el Presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría absoluta del Congreso.
- **D** El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría simple de la moción de censura.

Administración General del Estado, 2018 · Administrativo (C1)

58 **El artículo 3.1 de la vigente Constitución Española establece que el castellano es la lengua oficial del Estado, y que todos los españoles:**

- **A** Tienen el derecho a conocerla y a usarla
- **B** Tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla
- **C** Tienen el deber de conocerla y de usarla
- **D** Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Ayuntamiento de Santiago de Compostela, 2020 · Administrativo (C1)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

59 **La Constitución Española de 1978 recoge con amplitud principios del Estado de Derecho. Entre ellos se pueden destacar:**

A Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

B La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

C Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.

D Todos son principios del Estado de Derecho.

Comunidad de Madrid, 2025 · Titulado Superior, Área C

60 **El Gobierno, en el sistema constitucional español:**

A Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.

B Ejerce la función legislativa y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

C Se compone del Presidente y de los Vicepresidentes.

D Se compone exclusivamente del Presidente y de los Ministros.

Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, 2019 · Policía Local (C1)

61 **Según el Título III de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al Congreso de los Diputados?**

A El Congreso es una Cámara de representación territorial.

B El Congreso se compone de un número fijo de 350 diputados.

C El Congreso puede otorgar o retirar la confianza al Gobierno mediante la moción de censura o la cuestión de confianza.

D El Congreso no participa en la elaboración de las leyes orgánicas.

Junta de Castilla y León, 2026 · Ingeniero Técnico Agrícola (A2)

62 **El artículo 8 de la Constitución Española establece que las fuerzas armadas tienen como misión:**

A Garantizar la unidad y dependencia de España.

B Garantizar la estabilidad e independencia de la Nación.

C Garantizar la soberanía y la estabilidad de la Nación.

D Garantizar la soberanía e independencia de España.

Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, 2019 · Conserje

63 **Según lo establecido en la Constitución los actos del rey:**

A Deberán estar siempre refrendados. Carecen de validez sin el anterior refrendo, salvo lo dispuesto en el art. 64.2 de la Constitución

B Ninguna de las anteriores es correcta.

C En general no necesitan estar refrendados, al no estar sujeto el Rey a responsabilidad, según lo dispuesto en el art. 56.3 de la Constitución

D Todas son incorrectas

Ayuntamiento de Málaga, 2021 · Auxiliar Administrativo (C2)

PÁG. 60 **MUESTRA GRATIS** · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

64 **Según el art. 55.1 de la Constitución Española, ¿qué derechos no podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de sitio?**

- **A** Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.
- **B** El domicilio es inviolable.
- **C** Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.
- **D** A la libertad de cátedra.

Región de Murcia, 2018 · Auxiliar Administrativo (C2)

65 **El artículo 103 de la Constitución dispone que se regulará por ley:**

- **A** El sistema de compatibilidades de los funcionarios públicos
- **B** El acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito, capacidad y compensación de desventajas
- **C** El estatuto de los funcionarios públicos
- **D** Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, 2026 · Técnico de Administración General (A1)

66 **Según el artículo 68.6 de la Constitución Española, el Congreso electo deberá ser convocado:**

- **A** Dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones.
- **B** Dentro de los veinticinco días siguientes a la convocatoria de las elecciones.
- **C** Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
- **D** Entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato.

Xunta de Galicia, 2018 · Auxiliar Administrativo (C2)

67 **De acuerdo con el artículo 136 de la Constitución Española de 1978, el Tribunal de Cuentas:**

- **A** Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Gobierno, así como del sector público.
- **B** Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Gobierno.
- **C** Las cuentas del Gobierno y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.
- **D** Todas las anteriores son incorrectas.

Comunidad de Madrid, 2026 · Titulado Superior, Área C

68 **¿Cuál de los siguientes derechos no es un Derecho Fundamental consagrado en la Constitución?**

- **A** El Derecho a la propiedad privada
- **B** El Derecho a la vida
- **C** El Derecho a la libertad de expresión
- **D** El Derecho a la intimidad

Región de Murcia, 2024 · Ingeniero Técnico Industrial (A2)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

69 **Indique la respuesta correcta:**

- **A** El estado de alarma lo declara el gobierno mediante decreto
- **B** El estado de alarma lo declara el gobierno previa autorización del congreso de los diputados
- **C** El estado de alarma es acordado por mayoría absoluta del gobierno
- **D** Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Ayuntamiento de Santa Brígida, 2023 · Policía Local (C1)

70 **Está legitimado para interponer el recurso de amparo.**

- **A** El Presidente del Gobierno.
- **B** El Presidente de una Comunidad Autónoma.
- **C** El Ministerio Fiscal.
- **D** La Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma.

Universidad de Valladolid, 2018 · Auxiliar Administrativo (C2)

71 **Según el artículo 150 de la Constitución Española de 1978, indique la respuesta correcta:**

- **A** El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas; no obstante, nunca en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general.
- **B** El Estado deberá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas.
- **C** El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, sólo en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general.
- **D** El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general.

Xunta de Galicia, 2018 · Auxiliar Administrativo (C2)

72 **En relación con la reforma de la Constitución, señale la respuesta correcta:**

- **A** Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
- **B** Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo primero, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
- **C** La revisión total de la Constitución o parcial que afecte al Título preliminar, Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, exige aprobación del principio por 3/5 de cada Cámara y disolución inmediata de las Cortes.
- **D** Cuando se proponga la revisión total o parcial de la Constitución que afecte al Título preliminar, Capítulo primero, Sección primera del Título I, o al Título II, se aprobará el principio por mayoría de tres quintos de cada Cámara y se procederá a la disolución inmediata de las Cortes.

Ayuntamiento de Ingenio, 2025 · Técnico de Administración General (A1)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

73 **Según el Título II de la Constitución Española relativo a la Corona:**

A La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey

B Las abdicaciones y renuncias en el orden sucesorio se resolverán por ley ordinaria

C La Reina consorte o el consorte de la Reina podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia

D Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de tres o cinco personas

Junta de Andalucía, 2018 · Agente de Medio Ambiente (C1)

74 **Una de las siguientes afirmaciones respecto de la persona preferida para acceder a la Corona es incorrecta:**

A Tendrá preferencia, de entre dos primos hermanos varones, el más joven respecto del mayor.

B Tendrá preferencia, de entre dos hermanos varón y mujer, el varón, independientemente de su edad.

C Tendrá preferencia, de entre una hija y un nieto, una hija.

D Tendrá preferencia, de entre un primo hermano y un primo segundo, el primo hermano.

Ayuntamiento de Bueu, 2024 · Administrativo Jefe de Negociado

75 **El artículo 10.2 de la Constitución Española establece:**

A Que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

B Que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

C Que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

D Que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Ayuntamiento de Tui, 2025 · Policía Local (C1)

76 **El Defensor del Pueblo:**

A Es el supremo órgano consultivo del Gobierno.

B Puede supervisar la actividad de la Administración General del Estado, pero no la de las Comunidades Autónomas.

C Puede anular resoluciones e imponer sanciones, siempre que no impliquen privación de libertad.

D Tiene como misión la defensa de todos los derechos comprendidos en el Título 1 de la Constitución española, y no sólo los susceptibles de recurso de amparo.

Ayuntamiento de Meliana, 2021 · Auxiliar Administrativo (C2)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

77 **La constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales:**

- **A** Se determinan en la Ley Orgánica del Poder Judicial, al igual que el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados.
- **B** Vienen determinados por la Constitución y su modificación exige la reforma constitucional.
- **C** Vienen determinados por la Constitución en su carácter básico, pero requieren desarrollo reglamentario.
- **D** Vienen determinados por la Constitución en su carácter básico, pero se desarrollan en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.

Ayuntamiento de Mogán

78 **Según la Constitución Española, todos los actos del Rey son:**

- **A** Refrendados, salvo aquellos que éste realiza libremente, entre los que se encuentra el nombramiento y cese de los miembros civiles y militares de la Casa Real.
- **B** Refrendados por el Ministro de Justicia en cualquier caso.
- **C** Refrendados por el Presidente del Congreso de los Diputados siempre.
- **D** Refrendados siempre por cada Ministro en razón de la materia de que se trate.

Servicio Andaluz de Salud, 2023 · Técnico de Función Administrativa, Administración General (A1)

79 **El Tribunal Constitucional se compone de:**

- **A** 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- **B** 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, tres a propuesta del Congreso por mayoría de dos tercios de sus miembros; tres a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; tres a propuesta del Gobierno, y tres a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- **C** 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, dos a propuesta del Congreso por mayoría de dos tercios de sus miembros; dos a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y seis a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- **D** 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, dos a propuesta del Congreso por mayoría de dos tercios de sus miembros; dos a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; cuatro a propuesta del Gobierno, y cuatro a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Ayuntamiento de Valdemaqueda, 2025 · Administrativo (C1)

80 **Conforme al artículo 25 de la Constitución Española de 1978, entre los derechos reconocidos a los condenados a pena de prisión que estuvieren cumpliendo la misma NO se encuentra el derecho:**

- **A** Al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
- **B** A un trabajo remunerado.
- **C** A los beneficios correspondientes de la Seguridad Social.
- **D** A una integración real y efectiva tras su puesta en libertad.

Gobierno de La Rioja, 2023 · Telefonista (AP)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

81 **En caso de no prosperar una iniciativa del proceso autonómico podrá reiterarse:**

- A Dentro de los 4 años siguientes.
- B Solamente pasados 5 años.
- C Pasados 3 años.
- D Solamente pasados 4 años.

Ayuntamiento de Cáceres · Administrativo (C1)

82 **¿Cuál es un derecho fundamental?**

- A La vida y la integridad física y moral.
- B Todas las opciones son correctas.
- C El trabajo.
- D Una vivienda digna y adecuada.

Ayuntamiento de Bueu, 2024 · Educador Social (A2)

83 **De acuerdo con la Constitución Española, ¿hay alguna confesión de carácter estatal?**

- A Sí, la religión Católica
- B No, pero los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás religiones
- C No, las creencias religiosas de la sociedad española no deben influir en los poderes públicos
- D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Ayuntamiento de Torre Alhaquime, 2023 · Técnico de Administración General (A1)

84 **Según el artículo 11.3 de la Constitución Española de 1978, en los países iberoamericanos podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen:**

- A Siempre que tales países reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco.
- B Aunque no hayan tenido o tengan una particular vinculación con España.
- C En los casos que la normativa de tales países lo permita para los ciudadanos españoles y europeos.
- D Aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco.

Administración General del Estado, 2024 · Gestión de la Administración Civil del Estado (A2)

85 **En referencia a la provincia, en la Constitución, en su artículo 141 recoge:**

- A No se podrán crear agrupaciones de municipios de diferentes provincias.
- B Cualquier alteración de los límites provinciales será aprobada por el parlamento de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca.
- C La provincia tiene personalidad jurídica propia.
- D Las Haciendas Locales tienen como objetivo garantizar la situación económica de los municipios.

Ayuntamiento de Castronuño, 2020 · Administrativo

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

86 **Señale la respuesta incorrecta. Según la Constitución:**

A Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de los avales concedidos por las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.

B Las Comunidades Autónomas podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

C Las Corporaciones Locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

D Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.

Generalitat Valenciana, 2025 · Técnico de Gestión (A2)

87 **Velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, el Estado garantiza la realización efectiva del principio de:**

A Igualdad

B Seguridad jurídica

C Justicia universal

D Ninguna de las anteriores es correcta.

Mancomunidad de La Ribera, 2021 · Administrativo

88 **¿Cuál de los siguientes derechos se recoge en la Sección primera de los derechos fundamentales y de las libertades públicas del Capítulo II del Título I de la Constitución Española?:**

A Derecho a la propiedad privada y a la herencia.

B Derecho a la protección de la salud.

C Derecho de Asociación.

D Derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Ayuntamiento de Huétor Tájar, 2024 · Técnico de Inclusión Social (A2)

89 **De acuerdo con la Constitución Española, las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución:**

A El derecho de las Comunidades Autónomas será, en todo caso, supletorio del derecho estatal.

B Podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos.

C Se considerarán competencias compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

D Corresponderá directamente a las Comunidades Autónomas, en virtud de una delegación de competencias.

Universidad Complutense de Madrid, 2020 · Auxiliar Administrativo (C2)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

90 **¿Cuál de los siguientes derechos o libertades puede ser tutelado a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?**

- **A** Libertad ideológica
- **B** Derecho de propiedad privada
- **C** Derecho de negociación colectiva
- **D** Derecho de fundación

Ayuntamiento de Utiel, 2022 · Policía Local (C1)

91 **Según se establece en el artículo 87 de la Constitución Española, la iniciativa legislativa en materia tributaria corresponde a:**

- **A** Al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y las Leyes Reguladoras de la materia.
- **B** Al Gobierno, al Congreso, al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras y a las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
- **C** Al Gobierno, al Congreso, al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras, a las Asambleas de las Comunidades Autónomas y a la iniciativa popular que en todo caso exigirá no menos de 500.000 firmas acreditadas.
- **D** Al Gobierno y al Congreso, de acuerdo con la Constitución y las Leyes Reguladoras de la materia.

Junta de Andalucía, 2022 · Gestión Financiera (A2)

92 **Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con el Título IV de la Constitución Española "Del Gobierno y de la Administración":**

- **A** La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
- **B** El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función legislativa y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
- **C** El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
- **D** Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia jerárquica del Rey, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Gobierno de Aragón, 2025 · Trabajador Social (A2)

93 **¿Cuál de las siguientes materias no debe desarrollarse por ley orgánica?:**

- **A** La institución del Defensor del Pueblo.
- **B** Los estados de alarma, excepción o sitio.
- **C** La organización de la Administración General del Estado.
- **D** El Tribunal de Cuentas.

Ayuntamiento de Marmolejo

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

94 De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española:

- **A** Los Estatutos de Autonomía no podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas.
- **B** Un Decreto-ley regulará las bases de la organización militar.
- **C** La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española.
- **D** La soberanía nacional reside en las Cortes Generales.

Ayuntamiento de Requena · Policía Local (C1)

95 ¿Cuál de los siguientes principios no aparece expresamente en el artículo 1 de la Constitución Española?

- **A** Estado social y democrático de Derecho
- **B** Separación de poderes
- **C** Pluralismo político
- **D** Libertad

Ayuntamiento de Cercedilla, 2023 · Peón de Aguas (AP)

96 Los Estatutos de autonomía… (señale la incorrecta):

- **A** Deben contener la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
- **B** Deben contener la delimitación de su territorio.
- **C** Deben contener la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
- **D** La Reforma se aprueba por ley ordinaria.

Ayuntamiento de Antequera, 2020 · C1

97 Señale la opción correcta sobre el control de los reglamentos:

- **A** La vía de excepción no permite la inaplicación de un reglamento contrario a la ley por los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción civil.
- **B** En cualquier momento, las Administraciones Públicas, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
- **C** El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional reglamentos, adoptados por los órganos de las Comunidades Autónomas, que estime inconstitucionales. La impugnación producirá la suspensión de la disposición recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
- **D** La anulación de un precepto de una disposición general, por una sentencia firme, también implicará la de todos los actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales.

Junta de Extremadura, 2022 · Titulado superior jurídico (A1)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

98 No está garantizado por la Constitución Española el principio de:

- **A** Jerarquía normativa.
- **B** Retroactividad de las disposiciones sancionadoras o no favorables para los ciudadanos.
- **C** Seguridad jurídica.
- **D** Legalidad.

Ayuntamiento de Mogán · Educador Social (A2)

99 Según el artículo 43 de la Constitución española de 1978, el derecho a la protección de la salud:

- **A** Es un derecho fundamental de la persona.
- **B** Es un derecho simple de los españoles.
- **C** Es un principio rector de la política social y económica del Estado.
- **D** Es un principio inspirador de la política social y económica del Estado.

Junta de Andalucía, 2021 · Trabajador Social (A2)

100 Respecto del Gobierno señala la Constitución que… (señale la incorrecta):

- **A** Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.
- **B** Presidente, Ministros y Vicepresidente son miembros de existencia obligatoria.
- **C** Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.
- **D** Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Ayuntamiento de Antequera, 2020 · C1

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

Soluciones — Tema 1

La Constitución Española de 1978

Clave rápida

Corrige aquí antes de leer las explicaciones.

1 **B**	2 **D**	3 **D**	4 **B**	5 **B**	6 **B**	7 **B**	8 **C**	9 **C**	10 **C**
11 **A**	12 **D**	13 **C**	14 **D**	15 **A**	16 **D**	17 **C**	18 **C**	19 **C**	20 **B**
21 **A**	22 **C**	23 **B**	24 **D**	25 **C**	26 **B**	27 **C**	28 **D**	29 **C**	30 **A**
31 **C**	32 **B**	33 **D**	34 **B**	35 **B**	36 **A**	37 **D**	38 **B**	39 **D**	40 **D**
41 **C**	42 **C**	43 **B**	44 **B**	45 **A**	46 **D**	47 **B**	48 **C**	49 **A**	50 **B**
51 **C**	52 **B**	53 **D**	54 **D**	55 **A**	56 **A**	57 **B**	58 **B**	59 **D**	60 **A**
61 **C**	62 **D**	63 **B**	64 **D**	65 **C**	66 **C**	67 **D**	68 **A**	69 **A**	70 **C**
71 **D**	72 **A**	73 **A**	74 **A**	75 **A**	76 **D**	77 **A**	78 **A**	79 **A**	80 **D**
81 **B**	82 **A**	83 **B**	84 **D**	85 **C**	86 **A**	87 **D**	88 **C**	89 **B**	90 **A**
91 **B**	92 **C**	93 **C**	94 **C**	95 **B**	96 **D**	97 **C**	98 **B**	99 **C**	100 **B**

Aciertos

1.ª vuelta ____ / 100

2.ª vuelta ____ / 100

1 — B

Art. 1 CE Los valores superiores que el ordenamiento jurídico español proclama desde su norma fundamental son cuatro y deben memorizarse de forma exacta: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Conviene fijar bien el último, pues suele alterarse sustituyéndolo por términos parecidos como pluralismo social o soberanía nacional, que no figuran en esa enumeración. Tampoco son valores superiores la enseñanza ni la sanidad, que responden a derechos y servicios concretos, no a estos principios básicos.

2 — D

Art. 137 CE Las entidades locales gestionan sus propios intereses, pero su autonomía es de naturaleza administrativa, no política. Pueden dictar normas reglamentarias como ordenanzas, nunca leyes. La capacidad de aprobar leyes corresponde en exclusiva al Estado y a las Comunidades Autónomas, que sí cuentan con asambleas legislativas. Por ello la autonomía local no comporta en ningún caso potestad para legislar, sino únicamente facultades de autoorganización y de regulación subordinada a la ley.

3 — D

Art. 1 CE La Monarquía parlamentaria describe cómo se organiza y ejerce el poder político: hay un rey como jefe del Estado, pero quien gobierna y responde ante el Parlamento es el ejecutivo elegido. Eso define la forma de gobierno, distinta de la forma de Estado, que atiende a la organización territorial del poder (unitario, autonómico o federal). El texto constitucional la presenta como la fórmula política del Estado español, encuadrándose en este plano del modo de gobernar.

4 — B

Art. 149 CE El Estado se reserva en exclusiva fijar las condiciones básicas que aseguren que todos los españoles disfruten por igual de sus derechos y soporten por igual sus deberes constitucionales, evitando diferencias según el territorio. Las demás materias citadas (pesca en aguas interiores, marisqueo, caza, montes, agricultura y ganadería) pertenecen al ámbito que las comunidades autónomas pueden asumir, por lo que no son competencia estatal exclusiva. El matiz decisivo es asociar la igualdad básica entre españoles al Estado.

5 — B

Art. 9 CE La Constitución garantiza la **irretroactividad** de las normas que sancionan o restringen derechos, es decir, lo contrario de lo que afirma la opción elegida. Una norma desfavorable no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor. Junto a este principio, el texto fundamental ampara la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la responsabilidad de los poderes públicos y la prohibición de la arbitrariedad. El matiz decisivo es la inversión del verbo: se protege que no se apliquen hacia atrás, nunca que sí lo hagan.

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** Cómpralo aquí ›

6
B

Art. 1 CE El modelo social del Estado supone que los poderes públicos no se limitan a respetar libertades, sino que intervienen activamente en la sociedad y la economía para corregir desigualdades y hacer reales los derechos reconocidos. Su finalidad es que toda la población pueda ejercer de forma efectiva esos derechos, promoviendo igualdad y justicia. Por eso no es un Estado meramente abstencionista ni se reduce a derechos civiles, y resulta plenamente compatible con la monarquía parlamentaria que consagra nuestra Constitución.

7
B

Art. 53 CE El procedimiento ágil y de tramitación rápida ante los tribunales ordinarios ampara únicamente la igualdad ante la ley y los derechos de la Sección Primera del Capítulo Segundo, es decir, los reconocidos entre los artículos quince y veintinueve. La libertad sindical se sitúa dentro de ese bloque y por ello disfruta de esta protección reforzada. En cambio, el derecho a la propiedad privada queda fuera, y la objeción de conciencia solo se beneficia del recurso de amparo, no de este cauce preferente y sumario.

8
C

Art. 140 CE La elección de los concejales se realiza mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, pero la forma de esa elección la fija la ley estatal, no un reglamento propio de cada municipio. Ahí está el error: sustituir la remisión legal por un supuesto reglamento municipal altera el sentido del precepto constitucional. El resto reproduce fielmente la regulación: personalidad jurídica plena de los municipios, gobierno a cargo de los ayuntamientos y elección de alcaldes por concejales o vecinos.

9
C

Art. 81 CE Los Estatutos de Autonomía se aprueban mediante ley orgánica, por lo que necesitan el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso, es decir, más de la mitad de todos los diputados, en una votación final que recae sobre el conjunto del texto. No basta con que haya más síes que noes entre los presentes, que sería la mayoría simple propia de las leyes ordinarias. Conviene distinguir esta mayoría reforzada del simple cómputo de presentes que rige el procedimiento legislativo común.

10
C

Art. 17 CE El habeas corpus es el mecanismo que permite poner de inmediato ante el juez a quien ha sido detenido ilegalmente, para que la autoridad judicial revise la legalidad de esa privación de libertad y decida sobre ella. Conviene distinguirlo de otras garantías del detenido: el plazo máximo de detención preventiva, el derecho a la asistencia letrada y el derecho a no declarar son protecciones distintas, propias del estatuto del detenido, pero no constituyen el contenido propio de este procedimiento.

11
A

Art. 148 CE Las relaciones internacionales corresponden en exclusiva al Estado, de modo que ninguna Comunidad Autónoma puede asumir esa materia. La política exterior afecta al conjunto del país y exige una voz única ante otros Estados y organismos. En cambio, la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda, las obras públicas de interés propio dentro de su territorio y el fomento del desarrollo económico dentro de la política nacional sí figuran entre las materias que las autonomías pueden asumir.

12
D

Art. 62 CE Entre las funciones que la norma fundamental atribuye a la Corona figura ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. El monarca dispone de las Fuerzas Armadas como mando supremo, no mediante un simple alto patronazgo, que se reserva a las Reales Academias. Igualmente, es informado de los asuntos de Estado y preside a tal fin las sesiones del Consejo de Ministros, no las de las Cortes Generales. La concesión de indultos generales queda expresamente prohibida por el texto constitucional.

13
C

Art. 10 CE El texto constitucional cita como base del orden político y la paz social la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás. El error está en sustituir el libre desarrollo de la personalidad por el de las funciones, expresión que no aparece en la norma. Conviene memorizar esta enumeración con precisión, pues suele alterarse cambiando una sola palabra clave.

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

14 **D**

Art. 68 CE El reparto de escaños en cada circunscripción se hace siguiendo criterios de representación proporcional, lo que beneficia un reflejo más fiel de las distintas fuerzas políticas. Conviene precisar otros datos del mismo precepto: la elección de diputados se regula por ley, no por reglamento; la circunscripción es la provincia, no la comarca; y el reparto de escaños se hace en proporción a la población, nunca a la superficie del territorio.

15 **A**

Art. 103 CE La regulación del estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública conforme a los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades de su derecho a la sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones se reserva a la ley. Así lo establece la Constitución en materia de organización de las Administraciones públicas. Todas las materias enumeradas comparten idéntica exigencia de rango legal, sin que ninguna quede relegada a la simple potestad reglamentaria.

16 **D**

Art. 137 CE La norma fundamental establece que el Estado se organiza en tres niveles: municipios, provincias y comunidades autónomas. No incorpora las islas ni las comarcas en esa enumeración básica, aunque luego puedan crearse otras agrupaciones. Tampoco son válidas las denominaciones de ayuntamientos, diputaciones o gobiernos autonómicos, que son órganos de gobierno, no entes territoriales. Por ello ninguna de las formulaciones propuestas reproduce con exactitud el listado constitucional.

17 **C**

Art. 141 CE La Constitución sí permite agrupar municipios en entidades distintas de la provincia, por lo que afirmar lo contrario contradice el texto. Los municipios tienen garantizada su autonomía y personalidad jurídica propia, y en los archipiélagos las islas cuentan con administración mediante Cabildos o Consejos. El error está en negar la posibilidad de crear esas agrupaciones supramunicipales, que la norma reconoce expresamente como cauce para organizar el territorio por encima del municipio.

18 **C**

Art. 54 CE Una norma con rango orgánico regula la institución encargada de defender los derechos del Título primero constitucional. Esa figura actúa como alto comisionado de las Cortes Generales y supervisa la actividad administrativa. Las restantes afirmaciones contradicen el texto vigente. Los derechos vinculan a todos los poderes públicos, incluidas las Administraciones. El ejercicio de esos derechos se regula por ley, no exclusivamente por ley orgánica. Los principios rectores informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación pública, no una supuesta judicialización. Por tanto, solo la mención al Defensor del Pueblo resulta exacta.

19 **C**

Art. 159 CE El órgano que controla la constitucionalidad de las leyes lo integran doce personas, todas designadas formalmente por el Rey. La propuesta corresponde a cuatro instituciones: el Congreso y el Senado eligen cuatro cada uno, siempre con mayoría reforzada de tres quintos; el Gobierno propone dos y el órgano de gobierno de los jueces otros dos. Conviene distinguir esta mayoría de tres quintos de la de dos tercios, que aquí no se exige, y mantener la cifra exacta de doce.

20 **B**

Art. 1 CE La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria, lo que significa que la jefatura del Estado corresponde al Rey, pero el poder político real se ejerce a través de instituciones representativas elegidas por los ciudadanos. La Corona convive con un sistema parlamentario en el que las decisiones de gobierno dependen del Parlamento. No cabe sostener que la soberanía resida en la Corona, pues esta pertenece al pueblo, ni que pueda alternarse libremente con una república por decisión parlamentaria.

21 **A**

Art. 9 CE La norma fundamental protege precisamente la **irretroactividad** de las disposiciones sancionadoras desfavorables o restrictivas de derechos: lo garantizado es que esas normas no se apliquen hacia atrás perjudicando al ciudadano. Por eso afirmar que se garantiza su retroactividad invierte el principio y resulta incorrecto. Sí se aseguran la seguridad jurídica, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas y la prohibición de actuación caprichosa de los poderes públicos. El matiz decisivo está en distinguir retroactividad de irretroactividad.

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

22
C

Art. 149 CE El Estado ostenta competencia exclusiva sobre la marina mercante y el abanderamiento de buques, según el listado de materias reservadas en la Constitución. La ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda, así como la asistencia social y la pesca fluvial, figuran entre las materias que las comunidades autónomas pueden asumir a través de sus estatutos. Solo la pesca marítima, y no la fluvial, pertenece al ámbito estatal. Por ello, la única materia de titularidad exclusiva estatal entre las opciones es la marina mercante.

23
B

Art. 99 CE La elección del jefe del Gobierno corresponde únicamente al Congreso de los Diputados, no a las dos cámaras reunidas. El Rey propone un candidato tras consultar a los grupos con representación parlamentaria, y ese candidato debe obtener la confianza solo del Congreso. El Senado no interviene en la investidura. Las demás afirmaciones son fieles al texto: dirige y coordina la acción gubernamental, propone al Rey los nombramientos y ceses de ministros, y su responsabilidad penal se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El error está en incluir al Senado y la sesión conjunta.

24
D

Art. 86 CE El decreto-ley es una norma con fuerza de ley que aprueba el Gobierno por sí mismo, sin autorización previa de las Cortes, ante situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Por proceder del poder ejecutivo, queda sometido a control: en el plazo de treinta días el Congreso debe pronunciarse expresamente convalidándolo o derogándolo. Debe diferenciarse del decreto legislativo, que sí exige delegación previa de las Cortes; aquí no hay autorización anticipada, sino ratificación posterior.

25
C

Art. 142 CE La financiación de los municipios y demás entidades locales descansa en dos fuentes principales: sus propios tributos y la participación en los ingresos tributarios del Estado y de las Comunidades Autónomas. La norma emplea el adverbio fundamentalmente, no exclusivamente, de modo que cabe acudir a otros recursos complementarios. Debe distinguirse de fórmulas que limitan los ingresos a tributos propios o que omiten la participación autonómica, pues alteran el tenor del texto constitucional.

26
B

Art. 18 CE Los derechos fundamentales en sentido estricto son los recogidos en la sección dedicada a los derechos fundamentales y libertades públicas, que gozan de máxima protección, incluido el recurso de amparo. El honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen pertenecen a ese núcleo privilegiado. En cambio, la protección de la salud es un principio rector de la política social, y tanto la propiedad y herencia como la negociación colectiva se ubican entre los derechos y deberes de los ciudadanos, con menor grado de garantía.

27
C

Art. 7 CE La norma fundamental exige que tanto los sindicatos de trabajadores como las asociaciones de empresarios tengan una organización y un funcionamiento internos democráticos, garantía de participación de sus miembros. Conviene precisar que el texto habla de defender y promover intereses económicos y sociales, no culturales, y declara libres su creación y actividad dentro del respeto a la Constitución y a la ley, sin mencionar la pertenencia ni el ordenamiento jurídico en general. Por eso solo la exigencia democrática reproduce fielmente el precepto.

28
D

Art. 35 CE El derecho y el deber de trabajar se recogen en el artículo 35 de la Constitución, dentro de la sección dedicada a los derechos y deberes de los ciudadanos, no en la sección de derechos fundamentales y libertades públicas. En cambio, el derecho de participación política y la prohibición de los tribunales de honor sí se encuentran en esta última sección. Por ello, el contenido del derecho al trabajo es el que no corresponde al epígrafe indicado.

29
C

Art. 82 CE La delegación legislativa se canaliza de dos formas distintas según su finalidad. Cuando se trata de elaborar un texto articulado nuevo a partir de unas directrices, se emplea una ley de bases. En cambio, cuando solo se busca unificar y armonizar varios textos legales ya existentes en uno solo, basta una ley ordinaria, nunca una ley orgánica. Confundir el instrumento de la refundición con la ley orgánica es el error: la refundición exige simplemente ley ordinaria que fije el alcance de la habilitación.

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

30
A

Art. 27 CE La enseñanza básica en España es obligatoria y gratuita. Este mandato constitucional impone a los poderes públicos garantizar el acceso universal a la educación en su nivel elemental sin coste para las familias. La obligatoriedad implica el deber de escolarización de los menores durante ese período formativo. La gratuidad asegura que ningún estudiante quede excluido por razones económicas. Ambos principios constituyen una garantía esencial del derecho a la educación reconocido para todas las personas.

31
C

Art. 153 CE La jurisdicción contencioso-administrativa controla la actividad de la administración autonómica y sus normas reglamentarias. Debe distinguirse este control del que ejerce el Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de las disposiciones normativas con fuerza de ley. El Gobierno controla el ejercicio de funciones delegadas, previo informe del Consejo de Estado, y el Tribunal de Cuentas fiscaliza los aspectos económicos y presupuestarios. Cada órgano tiene, por tanto, un ámbito constitucional diferente.

32
B

Art. 73 CE Las Cámaras celebran dos periodos ordinarios de sesiones al año: el primero abarca de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. Quedan fuera, por tanto, los meses que no pertenecen a ninguno de esos tramos: enero, que separa ambos periodos, y julio y agosto, coincidentes con el verano. Conviene memorizar los meses incluidos para deducir con seguridad cuáles restan excluidos.

33
D

Art. 106 CE El artículo 106 de la Constitución atribuye a los tribunales el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa, así como el control de que esta se ajuste a los fines que la justifican. La constitucionalidad de los Decretos Legislativos no se encuadra en ese control de la actuación administrativa: corresponde al Tribunal Constitucional. Por tanto, esa es la materia que no recoge el artículo citado.

34
B

Art. 134 CE Cuando llega el inicio del ejercicio sin que se hayan aprobado los presupuestos nuevos, no se paraliza la actividad económica del Estado: las cuentas del año anterior continúan vigentes de manera automática, sin necesidad de ningún acuerdo del Gobierno ni autorización adicional. Esa prórroga opera por mandato directo de la Constitución y se mantiene hasta que se aprueben y publiquen los nuevos presupuestos. Por ello sí cabe aprobar el gasto para contratar las obras con cargo a los créditos prorrogados.

35
B

Art. 167 CE En el procedimiento ordinario de reforma constitucional la consulta popular no es obligatoria, sino potestativa. Solo se convoca cuando, dentro de los quince días siguientes a la aprobación del texto por las Cortes, lo pide una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos Cámaras, es decir, basta el Congreso o el Senado por separado. Debe distinguirse del procedimiento agravado, donde el referéndum sí es preceptivo. La clave está en que se exige una sola Cámara, no las dos conjuntamente.

36
A

Art. 6 CE La Constitución reconoce a estas formaciones como cauce esencial para que los ciudadanos intervengan en la vida pública, junto con expresar el pluralismo político y contribuir a formar y manifestar la voluntad popular. La afirmación válida reproduce con exactitud esa función de servir de medio básico de participación. Conviene distinguirla de las redacciones que sustituyen la voluntad popular por una supuesta voluntad institucional o de las agrupaciones, pues alteran el texto y deforman su sentido.

37
D

Art. 14 CE La igualdad de todos los españoles ante la ley y la prohibición de cualquier discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o circunstancia personal o social encabezan el catálogo de derechos fundamentales. El texto reproducido coincide exactamente con esa garantía de igualdad, situada al inicio de la sección de derechos. Conviene distinguirla de preceptos cercanos como el derecho a la vida, la libertad ideológica o la libertad personal, que regulan materias distintas.

38
B

Art. 148 CE El reparto territorial distingue lo que las Comunidades Autónomas pueden asumir de lo reservado al Estado. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no realizan tráfico comercial pertenecen al ámbito autonómico. Las demás materias enunciadas son competencia estatal: las bases del régimen minero y energético, la legislación sobre pesas y medidas con la hora oficial, y las bases y coordinación de la planificación general de la economía. La clave está en el carácter no comercial de esas infraestructuras portuarias.

PÁG. 74 **MUESTRA GRATIS** · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

39
D

Art. 62 CE Las funciones que el texto constitucional atribuye al Rey incluyen expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, convocar a referéndum en los casos previstos y nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente. En cambio, la manifestación del consentimiento del Estado para obligarse por tratados que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública requiere autorización de las Cortes Generales. Por tanto, esa función no figura entre las que corresponden al Rey en el precepto examinado, sino en otro distinto relativo a los tratados internacionales.

40
D

Art. 140 CE El texto constitucional garantiza la autonomía municipal y reconoce a los municipios personalidad jurídica plena, no "capacidad jurídica". Además, son los concejales quienes se eligen por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, mientras que los alcaldes los eligen los concejales o los vecinos. Cada afirmación propuesta altera una palabra clave o invierte quién elige a quién, de modo que ninguna reproduce el tenor exacto de la norma. El matiz decisivo está en "personalidad" frente a "capacidad" y en no confundir sufragio universal con popular.

41
C

Art. 69 CE Las comunidades autónomas pueden designar senadores a través de sus asambleas legislativas, por lo que un miembro de la Asamblea de Extremadura puede ser nombrado para ese cargo. En cambio, la pertenencia al Tribunal Constitucional es incompatible con todo mandato representativo. Además, una persona no puede ser miembro simultáneamente del Congreso y del Senado.

42
C

Art. 21 CE El derecho de reunión pacífica en lugares de tránsito público no exige permiso de la autoridad: basta con comunicarlo previamente. Esa comunicación nunca es una autorización, de modo que la Administración no concede ni deniega el ejercicio del derecho. No obstante, la autoridad sí puede prohibir la concentración cuando concurran motivos fundados de alteración del orden público con riesgo para personas o bienes. Conviene distinguir además que este derecho figura junto al de reunión, no en el precepto que regula las asociaciones, por lo que situarlo en otro artículo o exigir autorización resulta incorrecto.

43
B

Art. 20 CE La libertad de creación de centros docentes por personas físicas y jurídicas forma parte del derecho a la educación, recogido en un precepto distinto al que protege las libertades de comunicación. El artículo dedicado a la expresión ampara difundir libremente los pensamientos, comunicar y recibir información veraz, la producción literaria, científica y artística, y la libertad de cátedra. La enseñanza, en cambio, tiene su propio espacio constitucional. Conviene precisar que la libertad de cátedra sí pertenece al bloque de libertades de expresión, no al de educación.

44
B

Art. 124 CE La clave está en distinguir el adjetivo "orgánico" del estatuto del Ministerio Fiscal respecto del rango de la norma que lo aprueba. La Constitución encomienda a una ley ordinaria la regulación de ese estatuto, pese a llamarse orgánico. En cambio, el régimen electoral general, la creación de policías autonómicas dentro del marco estatal y la resolución de las abdicaciones y renuncias de la Corona sí están reservadas expresamente a ley orgánica. El término "orgánico" describe el contenido organizativo, no el tipo de ley.

45
A

Art. 145 CE La unión o federación entre Comunidades Autónomas está expresamente prohibida por la Constitución, que no la contempla en ningún caso. En cambio, sí se permiten otras fórmulas excepcionales como crear una comunidad cuyo territorio no supere el de una provincia, dotar de autonomía a territorios fuera de la organización provincial o sustituir la iniciativa de las corporaciones locales. Estas últimas posibilidades aparecen previstas para casos de interés nacional, mientras que la agrupación entre comunidades queda vetada de raíz.

46
D

Art. 102 CE La afirmación es incorrecta porque la responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno se exige, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, no ante el Tribunal Constitucional. El artículo 98.3 establece las incompatibilidades de los miembros del Gobierno, y el artículo 101 regula los supuestos de cese que se mencionan en otra afirmación. La regla específica sobre responsabilidad criminal se encuentra en el artículo 102 de la Constitución.

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

47
B

Art. 31 CE El reparto del gasto público debe ser equitativo, pero además su planificación y ejecución se rigen por dos pautas concretas: aprovechar bien los recursos para lograr los objetivos y hacerlo gastando lo menos posible. Esa es la combinación que recoge el texto constitucional sobre el gasto. Conviene no confundirla con principios como la estabilidad o la sostenibilidad presupuestaria, que pertenecen a reformas y normas posteriores, no a este precepto original.

48
C

Art. 66 CE Las Cortes Generales aprueban los Presupuestos y controlan la acción del Gobierno; la afirmación falsa invierte ambos verbos al decir que controlan los Presupuestos y aprueban la acción del Gobierno. El reparto correcto es claro: se aprueba el gasto del Estado y se vigila o fiscaliza lo que hace el Ejecutivo. El matiz decisivo está precisamente en no intercambiar esos dos verbos, pues cambia por completo el sentido de la función parlamentaria.

49
A

Art. 17 CE Cuando alguien es retenido sin amparo legal, este procedimiento sirve para llevarlo de inmediato ante un juez, que controla la legalidad de la privación de libertad. La finalidad no es liberar sin más, sino someter la detención a control judicial urgente para que el juez decida. Conviene precisar que solo opera frente a detenciones ilegales, no frente a cualquier detención, y que su objeto es la puesta a disposición del juez, no la excarcelación automática.

50
B

Art. 13 CE Los extranjeros pueden participar en las elecciones municipales, tanto votando como presentándose como candidatos, cuando un tratado internacional o una ley lo reconozca y siempre que el otro país conceda un trato equivalente a los españoles. Este derecho se limita expresamente al ámbito municipal: no alcanza a las elecciones generales ni a las autonómicas. Conviene precisar que la exigencia de reciprocidad y el cauce del tratado o ley son requisitos acumulativos para ese reconocimiento.

51
C

Art. 78 CE El artículo 78 regula la composición y las funciones de las Diputaciones Permanentes, así como la continuidad de estas y la rendición de cuentas al reunirse la Cámara. No establece que las Cámaras deban contar con la asistencia de la mayoría de sus miembros para adoptar acuerdos. Por eso, esa afirmación no corresponde al contenido del artículo indicado.

52
B

Art. 23 CE El sufragio permite a la ciudadanía participar en los asuntos públicos mediante la elección de sus representantes. Se configura como un derecho público subjetivo porque puede ejercerse frente a los poderes públicos y estos deben garantizar su efectividad. Su fundamento constitucional se encuentra en el derecho de participación política.

53
D

Art. 123 CE El Tribunal Supremo encabeza la pirámide judicial en todas las ramas: civil, penal, contencioso-administrativa, social y militar. Sin embargo, su supremacía no alcanza la materia de garantías constitucionales, reservada a otro órgano específico que vela por la Constitución. Por eso no es jerárquicamente superior a ese órgano de garantías ni lo controla. La excepción de las garantías constitucionales es el matiz decisivo que distingue ambas instituciones y delimita el alcance de cada una.

54
D

Art. 137 CE La organización territorial del Estado descansa en tres niveles: municipios, provincias y comunidades autónomas. Todas estas entidades disponen de capacidad para administrar y decidir sobre los asuntos que les son propios. No se trata de un privilegio reservado a las comunidades autónomas ni a los municipios en exclusiva, sino de una garantía común a todos los entes que componen la estructura territorial. Conviene precisar que limitar la autonomía a uno o dos de esos niveles desvirtúa el reparto constitucional.

55
A

Art. 117 CE La independencia judicial exige que las situaciones que afectan a la permanencia de un juez en su puesto solo puedan regularse mediante norma con rango de ley. La suspensión, el traslado o la separación de quienes administran justicia constituyen garantías esenciales que ningún reglamento, instrucción o decreto del órgano de gobierno judicial puede fijar por sí mismo. Solo el legislador, con las causas y garantías que la propia norma establezca, puede determinar estos supuestos, lo que blinda al juzgador frente a presiones externas.

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

56
A

Art. 85 CE Los decretos legislativos son disposiciones normativas con rango de ley dictadas por el Gobierno en virtud de una delegación legislativa otorgada por las Cortes Generales. No son reglamentos, porque contienen legislación delegada y tienen rango legal. La opción relativa al debate inmediato corresponde a los decretos-leyes, mientras que la formación de textos articulados requiere una ley de bases.

57
B

Art. 113 CE Para retirar la confianza al Gobierno por iniciativa del Congreso se exige el respaldo de más de la mitad de los diputados, es decir, mayoría absoluta, porque debe incluir además el nombre de un candidato alternativo a la Presidencia. En cambio, cuando es el Presidente quien somete su programa a confianza, basta el voto favorable de la mayoría simple y se plantea solo ante el Congreso, nunca ante ambas Cámaras. Conviene distinguir esa diferencia de mayorías entre uno y otro instrumento.

58
B

Art. 3 CE La lengua oficial del Estado genera un doble vínculo para los ciudadanos: obligación de conocer el castellano y facultad de emplearlo. Conviene precisar que el conocimiento se configura como deber, mientras que el uso queda como derecho; no son ambos deber ni ambos derecho. Esta distinción es el matiz que suele confundirse, pues se tiende a duplicar el verbo en una misma categoría. La fórmula correcta combina deber de conocer y derecho a usar.

59
D

Art. 24 y 117 CE La Constitución recoge la dispensa de declarar por razón de parentesco o secreto profesional y garantiza que los jueces y magistrados solo puedan ser separados, suspendidos, trasladados o jubilados por causas y con garantías previstas en la ley. Estas previsiones protegen derechos y aseguran la independencia judicial. En conjunto, las afirmaciones constitucionales citadas se encuadran entre los principios propios del Estado de Derecho.

60
A

Art. 97 CE El Gobierno tiene encomendada la dirección de la política interior y exterior, así como de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado. También ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria conforme a la Constitución y las leyes; conviene precisar que no le corresponde la función legislativa, propia de las Cortes. En cuanto a su composición, la integran el Presidente, los Vicepresidentes en su caso, los Ministros y los demás miembros que fije la ley, de modo que enumeraciones parciales resultan incompletas.

61
C

Art. 112 y 114 CE El Congreso interviene en la relación de confianza entre el Gobierno y las Cortes. Puede retirar la confianza mediante una moción de censura y el Gobierno puede plantear ante él una cuestión de confianza. Si se aprueba la moción de censura o se deniega la cuestión de confianza, se producen las consecuencias previstas para la continuidad del Gobierno.

62
D

Art. 8 CE La misión esencial de los ejércitos, según la norma fundamental, es proteger la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Conviene memorizar la fórmula exacta, pues otras combinaciones cambian palabras clave como unidad, estabilidad o dependencia, términos que no figuran en el texto. El binomio correcto es siempre soberanía e independencia referido a España, no a la Nación.

63
B

Art. 56 CE Los actos del Rey requieren siempre la firma de otra autoridad, que asume la responsabilidad, y sin esa firma carecen de validez. La única salvedad es el nombramiento libre de los miembros de su Casa. Por ello es incorrecto afirmar que, con carácter general, no precisan esa firma. También falla la salvedad que remite a un precepto equivocado: la excepción no aparece en la norma sobre la responsabilidad de quien firma, sino en la que regula la libre designación de su Casa.

64
D

Art. 55 CE En el estado de sitio pueden suspenderse derechos como la libertad personal y la seguridad, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de residencia y circulación, porque la Constitución los enumera expresamente como suspendibles. Sin embargo, la libertad de cátedra queda fuera de ese listado y, por tanto, no admite suspensión. Conviene precisar que dentro de la libertad de expresión solo se contemplan la expresión de pensamientos y la comunicación de información veraz, no la enseñanza libre del docente.

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

65
C

Art. 103 CE La Constitución reserva a la ley la regulación de la situación jurídica de los empleados públicos, es decir, su régimen general de derechos y deberes. También remite a la ley el acceso, pero exigiendo únicamente los principios de mérito y capacidad, sin añadir la "compensación de desventajas". E igualmente prevé el sistema de incompatibilidades, no de "compatibilidades". Por ello, la única formulación que reproduce con exactitud el texto constitucional es la que menciona el estatuto de quienes sirven a la Administración.

66
C

Art. 68 CE Una vez celebradas las elecciones generales, la Cámara recién elegida no puede demorar su puesta en marcha: la norma fundamental fija un máximo de veinticinco días, contados desde el día de la votación, para que se le convoque a constituirse. El cómputo arranca de la fecha de celebración de los comicios, no de su convocatoria ni del fin del mandato. Conviene distinguir este plazo del que regula cuándo se vota, que se sitúa entre los treinta y los sesenta días desde que termina el mandato anterior.

67
D

Art. 136 CE El artículo 136 atribuye al Tribunal de Cuentas la fiscalización de las cuentas y de la gestión económica del Estado, no del Gobierno. También dispone que examina y comprueba la Cuenta General del Estado, y que se rinden ante él las cuentas del Estado y del sector público estatal. Por tanto, las tres afirmaciones sustituyen indebidamente «Estado» por «Gobierno».

68
A

Art. 33 CE La Constitución reconoce la propiedad privada en el artículo 33, pero no la incluye entre los derechos fundamentales. Estos tienen una protección constitucional específica, mientras que la propiedad queda delimitada por su función social y puede ser objeto de privación en los supuestos previstos. Por eso, aunque es un derecho constitucional, no tiene la consideración de derecho fundamental.

69
A

Art. 116 CE El estado de alarma es la situación de emergencia más leve y por ello su declaración corresponde al Gobierno por sí mismo, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros y por un plazo máximo de quince días, dando después cuenta al Congreso. La autorización previa del Congreso no se exige aquí, sino en el estado de excepción; el de sitio lo declara directamente el Congreso. Debe distinguirse, pues, según la gravedad de cada supuesto quién interviene y en qué momento.

70
C

Art. 162 CE Para pedir el amparo ante el Tribunal Constitucional están legitimados quienes invoquen un interés legítimo en la defensa de sus derechos fundamentales, junto con el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal, que actúa como garante de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos. Conviene distinguir esta vía de la del recurso de inconstitucionalidad, reservada al Presidente del Gobierno, a los presidentes y asambleas autonómicas, entre otros, que aquí no resultan habilitados.

71
D

Art. 150 CE Las leyes de armonización permiten al Estado fijar principios comunes para coordinar la actividad normativa autonómica cuando lo reclama el interés general. La clave está en que esta facultad alcanza incluso a materias que son competencia propia de las Comunidades Autónomas; precisamente ahí radica su excepcionalidad. Conviene precisar que se trata de una potestad facultativa, no de un deber, y que la palabra decisiva es "aun": no excluye las competencias autonómicas, sino que las abarca cuando el interés general lo exige.

72
A

Art. 168 CE La reforma agravada se aplica a los cambios más sensibles: revisión total, o parcial que toque los principios básicos, los derechos fundamentales y las libertades públicas o la regulación de la Corona. En esos casos el procedimiento exige primero aprobar el principio de la reforma por dos tercios de cada Cámara y, acto seguido, disolver las Cortes para que la decisión la ratifique un nuevo Parlamento. El bloque protegido es el Capítulo segundo, Sección primera del Título I, y la mayoría reforzada es de dos tercios, no de tres quintos.

73
A

Art. 59 CE La Constitución establece que la Regencia se ejerce por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey. Esta regla determina tanto el origen de la Regencia como la forma en que debe ejercer sus funciones. El artículo 59 recoge expresamente ambos requisitos.

PÁG. 78 **MUESTRA GRATIS** · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

74
A

Art. 57 CE El orden de sucesión sigue una escala fija: primero las líneas anteriores frente a las posteriores; dentro de la misma línea, el grado más próximo al más lejano; en igual grado, el varón antes que la mujer; y entre personas del mismo sexo, la de mayor edad sobre la más joven. Por eso, entre dos primos hermanos varones siempre prevalece el de más edad, nunca el más joven. El matiz decisivo es no invertir el criterio de edad, que premia al mayor.

75
A

Art. 10 CE La clave está en reproducir con exactitud el tenor del precepto: habla de derechos fundamentales y libertades, no de derechos en general, y obliga a interpretarlos conforme a dos referencias acumuladas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre la materia ratificados por España. Quien omite la Declaración Universal o suprime el adjetivo fundamentales altera el contenido. Esta regla convierte el Derecho internacional de los derechos humanos en criterio interpretativo de nuestros derechos.

76
D

Art. 54 CE Esta institución protege el conjunto de derechos y libertades recogidos en el Título I de la Constitución, sin limitarse a los que admiten recurso de amparo. Para ello supervisa la actuación de todas las administraciones, incluidas las autonómicas, y formula recomendaciones y advertencias, pero carece de potestad para anular resoluciones o imponer sanciones. Tampoco es órgano consultivo del Gobierno, función que corresponde al Consejo de Estado. Su fuerza reside en la persuasión y en dar cuenta a las Cortes Generales.

77
A

Art. 122 CE La organización interna de los tribunales —cómo se constituyen, cómo funcionan y quién los gobierna— y también las reglas básicas que rigen la carrera de jueces y magistrados se regulan en una sola norma de rango superior: la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es la propia Constitución la que reserva expresamente esa materia a dicha ley. No se modifica reformando la Constitución, ni queda al reglamento, ni se traslada a la norma sobre demarcación y planta, que solo fija el número y reparto territorial de los órganos.

78
A

Art. 64 y 65 CE El artículo 64 establece como regla que los actos del Rey sean refrendados por el Presidente del Gobierno o, cuando corresponda, por los ministros competentes. El artículo 65.2 dispone que el Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa. En consecuencia, esos nombramientos y relevos constituyen la excepción indicada.

79
A

Art. 159 CE El Tribunal Constitucional está formado por doce magistrados nombrados por el Rey. El reparto de propuestas se distribuye así: cuatro los propone el Congreso y cuatro el Senado, en ambos casos por mayoría reforzada de tres quintos; dos los propone el Gobierno y dos el Consejo General del Poder Judicial. El matiz decisivo está en la mayoría exigida a las Cámaras, que es de tres quintos y no de dos tercios, y en que ningún órgano propone más de cuatro nombres.

80
D

Art. 25 CE El artículo 25.2 reconoce a las personas condenadas a prisión el derecho al trabajo remunerado, a los beneficios de la Seguridad Social y al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. También dispone que las penas privativas de libertad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social, pero no enumera un derecho a una integración real y efectiva tras la puesta en libertad. Por tanto, ese derecho no figura entre los reconocidos expresamente en el precepto.

81
B

Art. 143 CE Cuando la propuesta para constituir una comunidad autónoma fracasa, no puede plantearse de nuevo de inmediato: debe transcurrir un periodo de espera de cinco años. La Constitución impone esta pausa para evitar reiteraciones sucesivas y dar estabilidad al proceso. Conviene precisar que el plazo exacto es de cinco años, no de tres ni de cuatro, por lo que cualquier cifra inferior resulta incorrecta.

82
A

Art. 15 CE En sentido estricto, los derechos fundamentales son los recogidos en la sección que va del derecho a la igualdad hasta la objeción de conciencia, dotados de máxima protección. El derecho a la vida y a la integridad física y moral encaja de lleno en ese grupo. En cambio, el trabajo y la vivienda digna se sitúan entre los derechos y deberes de los ciudadanos o los principios rectores, sin esa garantía reforzada. Por ello no cabe afirmar que todas las opciones lo sean.

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

83
B

Art. 16 CE España es un Estado aconfesional: ninguna religión tiene carácter oficial. No obstante, la propia Constitución matiza esa neutralidad obligando a tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y a mantener relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Por eso no existe confesión estatal, pero tampoco se ignora el hecho religioso. Debe distinguirse esa aconfesionalidad cooperativa del laicismo estricto que negaría toda relación entre poderes públicos y confesiones.

84
D

Art. 11 CE El texto constitucional permite que los españoles se naturalicen en los países iberoamericanos o en aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España, conservando su nacionalidad de origen. Esta posibilidad opera incluso cuando esos países no reconozcan a sus propios ciudadanos un derecho recíproco. Por tanto, la falta de reciprocidad no impide la naturalización sin pérdida de la nacionalidad española de origen. Se trata de una previsión que favorece los vínculos históricos y culturales entre España y dichas naciones.

85
C

Art. 141 CE La provincia se define como entidad local con personalidad jurídica propia, formada por la agrupación de municipios y como división territorial para cumplir los fines del Estado. Conviene precisar que la modificación de sus límites no la decide el parlamento autonómico, sino las Cortes Generales mediante ley orgánica, y que sí pueden crearse agrupaciones de municipios distintas de la provincia. Reconocer esa personalidad propia es lo que la convierte en sujeto de derechos y obligaciones con autonomía para gestionar sus intereses.

86
A

Art. 135.3 CE La prioridad absoluta se reconoce a los créditos destinados a satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública, no de los avales concedidos por las Administraciones. Por eso es incorrecto atribuir esa garantía presupuestaria a los avales. La Constitución sí permite a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales establecer y exigir tributos de acuerdo con ella y con las leyes.

87
D

Art. 138 CE El equilibrio económico adecuado y justo entre las distintas partes del territorio español es la expresión del principio de solidaridad, no de la igualdad ni de la seguridad jurídica. La Constitución encomienda al Estado garantizar la realización efectiva de esa solidaridad, atendiendo en especial a las circunstancias del hecho insular. Como ninguna de las opciones nombra la solidaridad, la respuesta acertada es la que niega las anteriores. El matiz decisivo es no confundir solidaridad territorial con igualdad de los ciudadanos.

88
C

Art. 22 CE La Sección primera del Capítulo II agrupa los derechos fundamentales y libertades públicas más protegidos, que abarcan los artículos quince a veintinueve. El derecho de asociación se encuentra en el artículo veintidós, dentro de ese bloque. La propiedad privada y la herencia pertenecen a la Sección segunda, mientras que la protección de la salud y el disfrute de una vivienda digna figuran como principios rectores del Capítulo tercero, con menor nivel de tutela.

89
B

Art. 149 CE Cuando una materia no está reservada de forma expresa al Estado en el texto constitucional, esa competencia puede ser asumida por las Comunidades Autónomas siempre que así lo recojan sus respectivos Estatutos de Autonomía. Se trata de la cláusula que articula el reparto territorial: lo no atribuido al Estado queda disponible para las autonomías según lo que cada Estatuto decida asumir. Conviene distinguir esta regla de la supletoriedad, que opera después y solo cuando una Comunidad no haya asumido la materia.

90
A

Art. 53 CE El recurso de amparo solo protege los derechos fundamentales recogidos en la sección que va del derecho a la igualdad hasta la objeción de conciencia, es decir, los artículos catorce a veintinueve y el apartado de objeción de conciencia. La libertad ideológica forma parte de ese núcleo protegido. En cambio, la propiedad privada, la negociación colectiva y el derecho de fundación quedan fuera de ese ámbito y se tutelan por vías ordinarias, sin acceso al amparo constitucional.

91
B

Art. 87 CE La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las Cámaras; las asambleas autonómicas también pueden promoverla en los términos previstos. La iniciativa popular no procede en materias tributarias. Por ello, la relación correcta incluye a los órganos estatales y a las asambleas autonómicas, pero no la iniciativa popular.

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

92
C

Art. 101 CE El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, cuando pierde la confianza parlamentaria en los supuestos constitucionalmente previstos, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. Las demás afirmaciones no son correctas: el Gobierno ejerce la función ejecutiva, la responsabilidad criminal se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependen del Gobierno.

93
C

Art. 81 CE La estructura interna del aparato administrativo del Estado se aprueba mediante ley ordinaria, no mediante la ley reforzada que exige mayoría absoluta. En cambio, la Constitución reserva expresamente esa ley reforzada para instituciones de garantía como el Defensor del Pueblo, para la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio, y para el órgano fiscalizador de las cuentas públicas. La clave está en distinguir qué materias tienen reserva constitucional reforzada y cuáles quedan a la regulación común del legislador ordinario.

94
C

Art. 2 CE La unidad indisoluble de la Nación española es el principio que la norma fundamental proclama como base del Estado, junto con el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Las comunidades sí pueden tener bandera propia, la organización básica militar se reserva a ley orgánica, no a decreto-ley, y la soberanía reside en el pueblo español, no en las Cortes Generales. Conviene fijar bien dónde reside la soberanía: en el pueblo del que emanan los poderes del Estado.

95
B

Art. 1 CE El primer artículo de la Constitución define a España como Estado social y democrático de Derecho y proclama como valores superiores del ordenamiento la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La división o separación de poderes, aunque inspira todo el texto y se desarrolla en su estructura institucional, no figura enunciada de forma expresa en ese artículo. Conviene precisar que el dato decisivo es el tenor literal: lo que no aparece nombrado es la separación de poderes.

96
D

Art. 147 CE El estatuto es la norma institucional básica de cada comunidad y se integra en el ordenamiento del Estado como ley orgánica. Por eso tanto su aprobación como su reforma exigen ese rango cualificado, con mayoría reforzada, y nunca una ley ordinaria. Su contenido mínimo abarca la denominación acorde a la identidad histórica, la delimitación del territorio y la denominación, organización y sede de las instituciones propias. Afirmar que la reforma se tramita por ley ordinaria contradice este régimen reforzado de modificación.

97
C

Art. 161.2 CE El artículo 161.2 de la Constitución permite al Gobierno impugnar ante el Tribunal Constitucional disposiciones y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación produce la suspensión de la disposición recurrida. El Tribunal Constitucional debe ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

98
B

Art. 9 CE El texto constitucional asegura que las normas sancionadoras o restrictivas de derechos no se apliquen hacia atrás en el tiempo, es decir, garantiza la **irretroactividad** de lo desfavorable. Lo que se enuncia aquí afirma justo lo contrario: la retroactividad de esas disposiciones perjudiciales, que precisamente está prohibida. Junto a ese principio sí figuran expresamente la jerarquía de las normas, la seguridad jurídica y la legalidad. El matiz decisivo está en distinguir entre retroactividad e irretroactividad de lo desfavorable.

99
C

Art. 43 CE El artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud y atribuye a los poderes públicos funciones de organización y tutela de la salud pública. En la Constitución, este derecho se encuadra entre los principios rectores de la política social y económica. No pertenece a la categoría de los derechos fundamentales.

100
B

Art. 98 CE El Gobierno se compone del Presidente, de los Ministros y de los Vicepresidentes solo en caso de que existan, además de los demás miembros que fije la ley. Por tanto, los Vicepresidentes no son una pieza de existencia obligatoria: pueden nombrarse o no según convenga, mientras que Presidente y Ministros sí resultan imprescindibles. Las restantes afirmaciones reproducen fielmente las funciones de dirección política, ejecutiva y reglamentaria, así como el régimen de incompatibilidades de sus miembros.

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

Tema
2

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Título preliminar. Capítulo II. Patrimonio de las Administraciones Públicas. Título I. Adquisición de bienes y derechos: Modos de adquirir, Adquisiciones a título oneroso, Normas especiales para las adquisiciones hereditarias, Adquisiciones a título gratuito. Título II. Protección y defensa del patrimonio. Capítulo I. De la obligación de proteger y defender el patrimonio. Capítulo II De las limitaciones a la disponibilidad de los bienes y derechos. Capítulo V. De las facultades y prerrogativas para la defensa de los patrimonios públicos. Título III. De los bienes y derechos públicos. Capítulo I. Afectación, desafectación y mutación de destino de los bienes y derechos.

PARTE 1

40 preguntas en este test

40 reales de examen

0 de refuerzo

48 minutos recomendados

Estas preguntas salen de 17 organismos distintos y de exámenes de 2005 a 2026.

Escribe tu respuesta en la casilla que hay junto a cada pregunta. Las soluciones empiezan en página nueva: no las verás mientras haces el test.

1 **Son bienes y derechos de dominio público o demaniales:**

A Los derechos particulares.

B Los derechos de arrendamiento, los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles.

C Los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales.

D Los contratos de futuros y opciones cuyo activo subyacente esté constituido por acciones o participaciones en entidades mercantiles.

Junta de Andalucía, 2023 · Ingeniero de Minas (A1)

2 **CUÁL DE LOS SIGUIENTES ES UN PRINCIPIO RELATIVO A LOS BIENES Y DERECHOS PATRIMONIALES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, SEGÚN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 33/2003, DE 3 DE NOVIEMBRE, DEL PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:**

A Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo.

B Adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio público a que estén destinados.

C Eficiencia y economía en su gestión.

D Todas las anteriores son correctas.

Junta de Andalucía, 2022 · Administración General (A2)

3 **El artículo 5 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), clasifica a los Bienes de dominio público. ¿A qué grupo pertenecen los materiales arqueológicos muebles?**

A A Bienes de dominio público destinados al uso público sin distinción.

B A Bienes de declarados expresamente como demanial mediante una Ley.

C A Bienes de dominio público destinados a servicio público por tratarse de bienes patrimoniales.

D En general, son Bienes de dominio público destinados al uso público sin distinción, salvo los declarados demaniales por ser Bien de Interés Cultural.

Gobierno de Aragón, 2026 · Arqueólogo (A2)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** Cómpralo aquí ›

4 **La afectación de un bien al dominio público implica:**

- **A** La incorporación de un bien patrimonial al dominio público mediante su vinculación a un uso general o a un servicio público.
- **B** La mera inclusión del bien en el Catálogo de Bienes de Interés Cultural.
- **C** La inscripción del bien en el Registro de la Propiedad como bien demanial.
- **D** La finalización del procedimiento de expropiación seguido para obtener el bien.

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2022 · Ingeniero Técnico de Obras Públicas (A2)

5 **Con respecto a los bienes patrimoniales y según lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta:**

- **A** En ningún caso tendrán la consideración de patrimoniales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos los derechos de arrendamiento.
- **B** Supletoriamente, se les aplicarán las normas del derecho privado en todas las cuestiones relativas a la competencia para adoptar los correspondientes actos y al procedimiento que ha de seguirse para ello.
- **C** La gestión y administración de estos bienes se regirá, entre otros, por los principios de eficacia y rentabilidad en la explotación.
- **D** La gestión de estos bienes deberá coadyuvar al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor, con excepción de la política de vivienda.

Ayuntamiento de Santander, 2023 · Administrativo (C1)

6 **El art. 6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas establece los principios relativos a los bienes y derechos de dominio público, entre los que NO se encuentran:**

- **A** Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.
- **B** Adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio público a que estén destinados.
- **C** El destino preferente de vial, dotación o equipamiento público.
- **D** Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo.

Junta de Andalucía, 2022 · Arquitecto (A1)

7 **Son bienes de dominio público:**

- **A** Todos los bienes de las Administraciones Públicas.
- **B** Los bienes de las Administraciones Públicas afectos a un uso o servicio público.
- **C** Los bienes de las Administraciones Públicas que no estén afectos a ningún uso o servicio público.
- **D** Únicamente los montes; calles, plazas y ríos.

Ayuntamiento de Rocafort, 2019 · Auxiliar Administrativo (C2)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

8 **¿Qué determina la afectación de acuerdo con el artículo 65 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas?**

- **A** La titularidad jurídica de los bienes y su inscripción registral automática.
- **B** La forma de adquisición de los bienes.
- **C** El régimen económico aplicable para su explotación concesional.
- **D** La vinculación de los bienes y derechos a un uso general o a un servicio público y su integración en el dominio público.

Comunidad de Madrid, 2026 · Técnico Superior Especialista en Conciliación y Defensa Jurídica (A1)

9 **Según la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el patrimonio de las Administraciones públicas está constituido por:**

- **A** Los bienes y derechos, cualquiera que haya sido su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos
- **B** Los bienes muebles e inmuebles, los derechos, así como los recursos que constituyeran su tesorería, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición
- **C** Los bienes, derechos, valores y demás recursos financieros de su hacienda, cualquiera que haya sido su naturaleza o su forma de adquisición
- **D** Los bienes muebles e inmuebles, los valores, créditos y demás recursos financieros de su hacienda, cualquiera que haya sido su forma adquisición

Ayuntamiento de Santander, 2025 · Técnico de Administración General (A1)

10 **La gestión de los bienes y derechos patrimoniales de las Administraciones Públicas, ¿a qué política pública debe coadyuvar en particular, en virtud de lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas?**

- **A** A la de empleo.
- **B** A la de inmigración.
- **C** A la medioambiental.
- **D** A la de vivienda.

Administración General del Estado, 2022 · Gestión de la Administración Civil del Estado (A2)

11 **De conformidad con lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, son en todo caso bienes de dominio público estatal:**

- **A** Los derechos de propiedad incorporal.
- **B** Los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles.
- **C** Los mencionados en el artículo 132.2 de la Constitución Española de 1978.
- **D** Los derechos de arrendamiento.

Administración General del Estado, 2022 · Gestión de la Administración Civil del Estado (A2)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

12 **Según la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la gestión y administración de los bienes y derechos demaniales por las Administraciones públicas se ajustarán a los siguientes principios:**

A Dedicación preferente del uso privado frente al común.

B Eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos.

C Adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio público a que estén destinados.

D Embargo y prescripción de los bienes.

Comunidad de Madrid, 2026 · Escala Superior de Empleo (A1)

13 **Tienen la consideración de bienes patrimoniales de las Administraciones Públicas:**

A Los valores.

B Los derechos de propiedad incorporal.

C Los créditos.

D El dinero.

Región de Murcia, 2021 · Escala Técnica Superior de Arquitectura (A1)

14 **En relación con los bienes patrimoniales, señala la afirmación correcta:**

A Son siempre inalienables e imprescriptibles

B Sólo pueden ser utilizados por los órganos de la Administración titular

C Su uso requiere autorización o concesión administrativa

D Pueden ser embargados cuando así lo disponga una resolución judicial firme

Ayuntamiento de La Roca del Vallès, 2025 · Técnico de Administración Económica

15 **La afectación es:**

A El acto mediante el cual un bien de dominio público de un ente público territorial se destina a un uso o servicio público.

B El acto mediante el cual un bien de propios de un ente público territorial se destina a bien patrimonial.

C El acto mediante el cual un bien patrimonial de un ente público territorial se destina a un uso o servicio público.

D El acto mediante el cual un bien patrimonial de un ente público territorial se incluye en el régimen de bienes de propios.

Ayuntamiento de La Orotava, 2018 · Administrativo (C1)

16 **¿Cuál es el plazo para ejercer la acción de recuperación de oficio de la posesión de un bien patrimonial y de un bien demanial?**

A 1 año para un bien patrimonial y 10 años para un bien demanial

B 5 años para un bien patrimonial y 15 años para un bien demanial

C 1 año para un bien patrimonial y en cualquier momento un bien demanial

D En cualquier momento se pueden recuperar de oficio toda clase de bienes

Ayuntamiento de La Roca del Vallès, 2025 · Técnico de Administración General (A1)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

17 **Según el artículo 71 de la Ley 33/2003, la mutación demanial es:**

- **A** El procedimiento por el cual un bien patrimonial pasa a tener la naturaleza de bien demanial
- **B** La alteración de la titularidad de un bien demanial
- **C** El procedimiento por el cual se efectúa la desafectación de un bien demanial y, simultáneamente, se produce su afectación a otro uso general o servicio público
- **D** El procedimiento por el cual un bien demanial pasa a tener la naturaleza de bien patrimonial

Ayuntamiento de La Roca del Vallès, 2025 · Técnico de Administración Económica

18 **Según el artículo 69 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la desafectación de un bien de dominio público implica:**

- **A** Que el bien adquiere la condición de patrimonial
- **B** Que, en todo caso, se produce la afectación a otro uso general, fin o servicio público
- **C** Que la Administración se reserve el uso exclusivo de ese bien para la realización de fines de su competencia
- **D** Que se puede acordar el otorgamiento directo de una concesión demanial sobre ese bien

Ayuntamiento de Baiona, 2021 · C1

19 **Según la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, los bienes y derechos que integran el patrimonio de las Administraciones Públicas, en razón del régimen jurídico al que están sujetos, se clasifican en las siguientes categorías:**

- **A** Bienes propios, adscritos y compartidos.
- **B** Bienes de dominio público o demaniales y bienes de dominio privado o patrimoniales.
- **C** Bienes integrantes del patrimonio administrativo y bienes integrantes del patrimonio histórico.
- **D** Bienes de dominio público y bienes demaniales.

Junta de Andalucía, 2022 · Actividad Física y del Deporte (A1)

20 **De acuerdo con el art. 8.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales por parte de las Administraciones públicas se ajusta a uno de los siguientes principios:**

- **A** Ejercicio diligente de las prerrogativas que la citada Ley u otras especiales otorguen a las Administraciones públicas, garantizando su conservación e integridad.
- **B** Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes.
- **C** Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.
- **D** Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo.

Comunidad de Madrid, 2024 · Escala Superior de Empleo (A1)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

21 **Según el artículo 3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, "El patrimonio de las Administraciones Públicas, está constituido por": (Señale la respuesta CORRECTA)**

A El conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición.

B El conjunto de dinero, valores, créditos y demás recursos financieros.

C Los recursos que constituyen su Tesorería.

D Exclusivamente por el conjunto de sus bienes materiales.

Región de Murcia, 2022 · Gestión Administrativa (A2)

22 **Son bienes y derechos de dominio público o demaniales, según la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas:**

A En todo caso, los mencionados en el artículo 128.1 de la Constitución.

B Los que, siendo de titularidad de las Administraciones públicas, sean derechos de arrendamiento, acciones o participaciones en entidades mercantiles, o derechos de propiedad incorporal.

C Los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales.

D El conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares las Administraciones públicas, así como sus productos y rentas, transferencias corrientes o de capital, y las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares.

Comunidad de Madrid, 2026 · Técnico Superior Especialista en Conciliación y Defensa Jurídica (A1)

23 **Son principios relativos a la gestión y administración de los bienes y derechos de dominio público recogidos en el artículo 6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas:**

A La eficiencia y economía en su gestión.

B La eficacia y rentabilidad en su explotación.

C Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes.

D Todas son falsas.

Región de Murcia, 2023 · Gestión Administrativa (A2)

24 **Los bienes patrimoniales:**

A Son inalienables, inembargables e imprescriptibles.

B Pueden enajenarse.

C No pueden enajenarse.

D Son inalienables, imprescriptibles, pero se pueden embargar.

Ayuntamiento de Alcalá la Real, 2025 · Administrativo (C1)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

25 **De conformidad con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la afectación de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado a los departamentos ministeriales, se lleva a cabo mediante:**

- **A** Real Decreto.
- **B** Acuerdo del Consejo de Ministros.
- **C** Ley.
- **D** Orden ministerial.

Administración General del Estado, 2022 · Gestión de la Administración Civil del Estado (A2)

26 **En los negocios jurídicos de adquisición gratuita de bienes y derechos, cuando el donante sea una Administración Pública, u organismo o entidad dependiente, estos se formalizarán:**

- **A** En este supuesto no se requiere formalización ya que se trata de negocios jurídicos entre Administraciones Públicas.
- **B** Se requerirá formalización en documento administrativo.
- **C** Este documento será título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad.
- **D** Las respuestas B y C son correctas.

Ayuntamiento de La Orotava, 2005 · Administrativo (C1)

27 **¿Cómo se llama el acto que determina la vinculación de los bienes y derechos a un uso general o a un servicio público y su consiguiente integración en el dominio público según el artículo 65 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas?**

- **A** Vinculación patrimonial.
- **B** Afectación.
- **C** Atribución de uso común.
- **D** Mutación demanial.

Gobierno de Aragón, 2025 · Administrativo (C1)

28 **Según la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, ¿a qué órgano compete la mutación de destino de los bienes inmuebles de la Administración General del Estado o afectos al cumplimiento de fines o servicios de esta?:**

- **A** Al Consejo de Ministros.
- **B** Al Ministro de Hacienda.
- **C** Al Ministro de Economía.
- **D** A las Cortes Generales.

Ayuntamiento de Santander, 2023 · Administrativo (C1)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

29 **La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas prevé que, salvo disposición legal en contrario, los bienes y derechos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos:**

- **A** Se entienden adquiridos con el carácter de demaniales, sin perjuicio de su posterior desafectación del uso general o del servicio público.
- **B** Se entienden adquiridos con carácter demanial si tienen un valor indeterminado.
- **C** Se entienden adquiridos con el carácter de patrimoniales, sin perjuicio de su posterior afectación al uso general o al servicio público.
- **D** Se entienden adquiridos con el carácter de patrimoniales, debiendo permanecer con esta condición por un plazo mínimo de 25 años.

Ayuntamiento de Santander, 2023 · Administrativo (C1)

30 **Según la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuando las Administraciones Públicas pierdan de forma indebida la posesión sobre los bienes y derechos de su patrimonio:**

- **A** Podrán recuperarla, previa autorización del Consejo de Ministros.
- **B** Podrán recuperarla, previa autorización judicial.
- **C** No podrán recuperarla por sí mismas.
- **D** Podrán recuperarla por sí mismas.

Administración General del Estado, 2024 · Gestión de la Administración Civil del Estado (A2)

31 **De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en el patrimonio de las Administraciones Públicas:**

- **A** Se incluirán todos los valores y los créditos de su titularidad.
- **B** Está constituido por todos los bienes y derechos de las mismas.
- **C** Se incluirán todos los recursos financieros de su hacienda.
- **D** Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Región de Murcia, 2022 · Administrativo (C1)

32 **La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, recoge en su artículo 8 los principios a los que debe ajustarse la gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales de las Administraciones Públicas, entre los cuales no se encuentran los principios de:**

- **A** Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad
- **B** Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados
- **C** Colaboración y coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas
- **D** Eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos

Ayuntamiento de Ponteareas, 2017 · Administrativo (C1)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

33 **¿Puede venderse un bien de dominio público?**

- **A** No, salvo que se desafecte previamente.
- **B** Sí, previa autorización de la Junta de Andalucía.
- **C** Sí, siempre que lo acuerde el Pleno de la Corporación.
- **D** Sí, siempre a través del correspondiente procedimiento licitatorio.

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2022 · Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (A1)

34 **¿Cuál de los siguientes bienes no se considera de dominio público?**

- **A** Los bienes de uso público.
- **B** Los bienes de servicio público.
- **C** Todas son correctas
- **D** Los bienes patrimoniales

Ayuntamiento de Vallehermoso, 2017 · Auxiliar Administrativo (C2)

35 **Según la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en relación con la potestad de deslinde, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

- **A** Iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, y mientras dure su tramitación, podrá instarse procedimiento judicial con igual pretensión.
- **B** La incoación del procedimiento para deslindar bienes patrimoniales de la Adminsitración General del Estado se acordará por el Ministro de Hacienda.
- **C** La resolución del procedimiento corresponderá al Director General de Patrimonio del Estado.
- **D** La instrucción del procedimiento corresponderá a los Delegados de Economía y Hacienda.

Administración General del Estado, 2025 · Gestión de la Administración Civil del Estado (A2)

36 **Tal y como se desprende del artículo 41 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la potestad de desahucio administrativo corresponde a los bienes:**

- **A** Patrimoniales.
- **B** Comunales.
- **C** De dominio público.
- **D** Todas las anteriores son correctas.

Ayuntamiento de Rojales, 2019 · Administrativo (C1)

37 **Las Administraciones Públicas no podrán adquirir bienes y derechos, en virtud del artículo 15 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas:**

- **A** Por herencia, legado o donación.
- **B** Por prescripción.
- **C** Por usucapión.
- **D** Por atribución de ley.

Ayuntamiento de Ingenio, 2025 · Técnico de Administración General (A1)

PARTE 1

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

38 **Señale la opción correcta en relación con la legislación sobre patrimonio de las Administraciones Públicas y los bienes demaniales:**

- **A** Salvo supuestos concretos previstos en la ley, la desafectación exige un acto expreso.
- **B** Aunque el bien desafectado hubiera sido adquirido mediante expropiación, en ningún caso puede surgir el derecho de reversión en beneficio del antiguo propietario.
- **C** Por la desafectación se produce la vinculación de un bien demanial a la finalidad a la que estaba destinado y, en consecuencia, se vincula al servicio público.
- **D** Tienen el carácter de bienes jurídico privados.

Gobierno de Aragón, 2022 · Administrativo (C1)

39 **Según la legislación patrimonial, un bien pertenece al dominio público cuando:**

- **A** Es de titularidad pública y se encuentra inscrito en el Inventario General del Estado.
- **B** Es de titularidad pública y está adscrito a un servicio público o al uso general.
- **C** Está destinado a generar ingresos mediante su explotación económica.
- **D** Ha sido adquirido por la Administración mediante expropiación forzosa.

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2022 · Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (A1)

40 **Identifica la afirmación errónea:**

- **A** Los bienes y derechos de dominio público son los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales.
- **B** Los bienes y derechos de dominio público se caracterizan por ser inalienables, inembargables e imprescriptibles.
- **C** El uso privativo de los bienes de dominio público estan sujetos a concesión.
- **D** Los bienes de dominio público pueden enajenarse en determinados casos.

Ayuntamiento de Gandia, 2021 · Administrativo (C1)

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

Soluciones — Tema 2

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones…

Clave rápida — Corrige aquí antes de leer las explicaciones.

1 **C**	2 **C**	3 **B**	4 **A**	5 **C**	6 **C**	7 **B**	8 **D**	9 **A**	10 **D**
11 **C**	12 **C**	13 **B**	14 **D**	15 **C**	16 **C**	17 **C**	18 **A**	19 **B**	20 **B**
21 **A**	22 **C**	23 **D**	24 **B**	25 **D**	26 **D**	27 **B**	28 **B**	29 **C**	30 **D**
31 **B**	32 **A**	33 **A**	34 **D**	35 **D**	36 **C**	37 **C**	38 **A**	39 **B**	40 **D**

Aciertos

1.ª vuelta ____ / 40

2.ª vuelta ____ / 40

PARTE 1

1 **C**

Art. 5 LPAAP Son demaniales los bienes y derechos de titularidad pública afectados al uso general o a un servicio público. También tienen ese carácter los que una ley declare expresamente como tales. La definición se basa, por tanto, en la titularidad pública y en la afectación o declaración legal.

2 **C**

Art. 8 LPAAP La eficiencia y la economía en la gestión forman parte de los principios aplicables a los bienes y derechos patrimoniales de las Administraciones públicas. El artículo también incluye, entre otros, la eficacia y rentabilidad, la publicidad y la transparencia. La dedicación preferente al uso común y la adecuación al uso general o al servicio público no figuran en la relación de principios recogida en ese artículo.

3 **B**

Art. 5 LPAAP El artículo 5.1 considera demaniales los bienes de titularidad pública afectados al uso general o al servicio público, y también aquellos a los que una ley otorgue expresamente ese carácter. Los materiales arqueológicos muebles pertenecen al grupo de bienes declarados demaniales expresamente por ley. Por eso, su clasificación no depende de que estén destinados al uso general o a un servicio público.

4 **A**

Art. 65 LPAAP Afectar un bien significa destinarlo a un uso de todos o a la prestación de un servicio público, lo que lo convierte en bien demanial. Un bien que era patrimonial pasa así al dominio público al vincularse efectivamente a ese fin. No basta con catalogarlo, inscribirlo en un registro ni con cerrar una expropiación: lo decisivo es esa vinculación al destino público, que es la esencia misma de la afectación.

5 **C**

Art. 8 LPAAP La administración de los bienes patrimoniales se rige por principios concretos, entre ellos la eficacia y la rentabilidad en su explotación, buscando obtener el mejor aprovechamiento económico. Conviene distinguir varios errores frecuentes: los derechos de arrendamiento sí se consideran patrimoniales; cuando falte regulación específica se aplica el derecho administrativo, no el privado, en materia de competencia y procedimiento; y la gestión debe ayudar a las políticas públicas vigentes, incluida de forma destacada la de vivienda, nunca excluyéndola.

6 **C**

Art. 6 LPAAP El artículo 6 recoge principios como la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, la adecuación de los bienes a su finalidad y la preferencia del uso común frente al privativo. No incluye el destino preferente a vial, dotación o equipamiento público entre esos principios. Por eso, esa formulación es la que no corresponde al contenido del artículo.

7 **B**

Art. 5 LPAAP El carácter demanial nace de la afectación: un bien es de dominio público cuando está destinado al uso general o a un servicio público, o cuando una norma le otorga expresamente esa condición. Los bienes que no cumplen ese destino son patrimoniales y se rigen por reglas privadas, no por el régimen de inalienabilidad e imprescriptibilidad. Por eso no basta con pertenecer a la Administración: lo decisivo es ese destino o afectación que vincula el bien a la utilidad colectiva.

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

8
D

Art. 65 LPAAP La afectación vincula un bien o derecho a un uso general o a un servicio público. Como consecuencia de esa vinculación, el bien o derecho se integra en el dominio público. No determina la titularidad ni la forma en que se adquirió el bien.

9
A

Art. 3 LPAAP El conjunto patrimonial se define de forma amplia: lo integran todos los bienes y derechos de la Administración, sin importar su naturaleza ni cómo se hayan adquirido o atribuido. La definición no se limita a muebles e inmuebles ni se restringe a recursos financieros o de tesorería, porque cualquier bien o derecho de titularidad pública entra en el concepto. Debe distinguirse de las versiones que añaden categorías como valores, créditos o recursos de la hacienda, que estrechan indebidamente esa fórmula general.

10
D

Art. 8 LPAAP La gestión de los bienes y derechos patrimoniales de las Administraciones Públicas debe coadyuvar al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas y, en particular, a la política de vivienda. Este principio de gestión patrimonial vincula la administración del patrimonio con finalidades de interés general. Así se orienta el uso eficiente de los bienes hacia objetivos sociales relevantes, entre los que destaca de forma expresa el acceso a una vivienda.

11
C

Art. 5 LPAAP La legislación sobre patrimonio público establece que tienen en todo caso la consideración de bienes de dominio público estatal aquellos que la Constitución reserva expresamente como demaniales del Estado. Se trata de los bienes citados en el precepto constitucional que enumera la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Los derechos de propiedad incorporal, los valores representativos de acciones y los derechos de arrendamiento constituyen, en cambio, bienes patrimoniales y no demaniales.

12
C

Art. 6 LPAAP Los bienes demaniales deben ser adecuados y suficientes para cumplir el uso general o el servicio público al que están destinados. Este principio orienta su gestión y administración por las Administraciones públicas. La inalienabilidad, la inembargabilidad y la imprescriptibilidad también son principios aplicables, pero no sustituyen al de adecuación y suficiencia.

13
B

Art. 7 LPAAP La Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas incluye expresamente los derechos de propiedad incorporal entre los bienes y derechos de carácter patrimonial. Por ello, los derechos sobre creaciones intelectuales se clasifican como patrimoniales cuando pertenecen a una Administración pública. La clasificación depende de que no tengan carácter demanial.

14
D

Art. 30 LPAAP Los bienes patrimoniales son los que la Administración posee sin estar destinados al uso o servicio público, por lo que se rigen por reglas más cercanas a las del tráfico privado. Por ello pueden venderse, prescribir y también ser objeto de embargo cuando un órgano judicial lo ordene mediante resolución firme. Las notas de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como la exigencia de concesión o autorización, corresponden a los bienes de dominio público, no a estos.

15
C

Art. 65 LPAAP Afectar un bien significa vincularlo a un uso general o a un servicio público, lo que lo convierte en bien de dominio público. El punto de partida es siempre un bien patrimonial que, por este acto, pasa a integrarse en el demanio. Conviene distinguirla de la desafectación, que es el camino inverso: un bien demanial deja de servir al uso o servicio y vuelve a la condición de patrimonial. El destino al uso o servicio público es lo que determina la naturaleza demanial.

16
C

Art. 55 LPAAP La Administración puede reaccionar contra quien le arrebata sus bienes, pero el plazo cambia según el tipo. Los bienes destinados al uso o servicio público (demaniales) son imprescriptibles, de modo que pueden recuperarse por la propia Administración en cualquier momento. En cambio, los bienes patrimoniales, sometidos a un régimen más parecido al privado, solo permiten recuperar la posesión por la vía de oficio dentro del año siguiente a la usurpación; pasado ese año hay que acudir a los tribunales.

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

17
C

Art. 71 LPAAP La mutación demanial es un cambio de destino dentro del propio dominio público: el bien deja de cumplir el fin al que estaba afecto y, en el mismo acto, queda vinculado a otro uso general, fin o servicio público. No se altera la naturaleza demanial del bien ni su titularidad; el bien sigue siendo público, solo cambia el destino al que sirve. Conviene distinguirlo de la afectación, que incorpora un bien patrimonial al dominio público, y de la desafectación, que lo devuelve al patrimonio.

18
A

Art. 69 LPAAP Cuando un bien deja de estar destinado al uso general o al servicio público, pierde su carácter demanial y pasa a integrarse en el patrimonio ordinario de la Administración. Ese cambio de naturaleza es precisamente la desafectación: el bien se convierte en patrimonial y queda sujeto al régimen jurídico privado, pudiendo enajenarse o gestionarse como cualquier otro elemento patrimonial. No exige reservar su uso ni vincularlo necesariamente a otro fin público, pues lo característico es justamente la salida del dominio público.

19
B

Art. 4 LPAAP La clasificación de los bienes y derechos patrimoniales de las Administraciones Públicas depende del régimen jurídico al que están sujetos. La ley distingue entre los bienes de dominio público, también llamados demaniales, y los bienes de dominio privado, denominados patrimoniales.

20
B

Art. 8.1.c LPAAP La gestión de los bienes y derechos patrimoniales debe respetar, entre otros, los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en su adquisición, explotación y enajenación. Estos principios favorecen una gestión abierta e imparcial de los bienes públicos. La inalienabilidad, la inembargabilidad y la imprescriptibilidad son características propias de los bienes de dominio público, no el principio señalado para los bienes patrimoniales.

21
A

Art. 3 LPAAP El patrimonio de las Administraciones públicas comprende el conjunto de sus bienes y derechos, sin importar su naturaleza ni el título por el que se hayan adquirido o atribuido. En cambio, el dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de la Hacienda pública quedan excluidos de ese concepto.

22
C

Art. 5 LPAAP Son demaniales los bienes y derechos de titularidad pública afectados al uso general o a un servicio público. También tienen ese carácter los que una ley califique expresamente como demaniales. Los derechos de arrendamiento, las participaciones en sociedades y los derechos de propiedad incorporal se consideran patrimoniales, no demaniales.

23
D

Art. 6 LPAAP El artículo 6 enumera principios como la inalienabilidad, la inembargabilidad y la imprescriptibilidad, así como la adecuación de los bienes a su destino y la cooperación entre Administraciones. Ninguna de las formulaciones propuestas coincide con esos principios. Por ello, todas son falsas.

24
B

Art. 7 LPAAP Los bienes patrimoniales son los de propiedad pública que no están afectos a un uso o servicio general, por lo que la Administración los gestiona como un particular gestiona su propiedad: puede venderlos, gravarlos o disponer de ellos conforme al procedimiento legal. Quedan, además, sujetos a embargo y a prescripción. Las notas de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad corresponden a los bienes de dominio público, no a estos.

25
D

Art. 66 LPAAP La vinculación de un bien del patrimonio estatal a un uso general o a un servicio público concreto corresponde acordarla al titular del ministerio competente en materia de hacienda. Este acuerdo se formaliza mediante orden dictada por dicho titular. Con esa afectación el bien queda destinado al fin señalado e ingresa en el dominio público. La regla no exige norma con rango legal, disposición reglamentaria del Gobierno ni acuerdo del máximo órgano colegiado. Por ello el instrumento adecuado es la disposición del titular del departamento hacendístico.

26
D

Art. 21 LPAAP Cuando un bien o derecho se adquiere de forma gratuita y quien lo entrega es una Administración Pública o una entidad dependiente de ella, la operación debe plasmarse en un documento administrativo, no en escritura notarial. Ese mismo documento administrativo sirve, por sí solo, como título para inscribir la adquisición en el Registro de la Propiedad. Por tanto, ambas afirmaciones son ciertas y se complementan: existe formalización obligatoria y esa formalización tiene plena eficacia registral.

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

27 **B**

Art. 65 LPAAP La afectación es el acto que vincula un bien o derecho patrimonial a un uso general o a un servicio público. Como consecuencia de esa vinculación, el bien o derecho se integra en el dominio público.

28 **B**

Art. 71 LPAAP Cambiar el destino de un bien inmueble dentro de la propia Administración General del Estado, pasándolo de un fin o servicio a otro, es una decisión de gestión patrimonial que la ley atribuye al titular del departamento responsable del patrimonio estatal. No requiere acuerdo del órgano colegiado de gobierno ni intervención parlamentaria, pues se trata de un acto interno de afectación entre servicios. Por ello la competencia recae en el Ministro de Hacienda, encargado ordinario de la administración del patrimonio público estatal.

29 **C**

Art. 16 LPAAP Cuando la Administración del Estado o sus organismos públicos incorporan bienes o derechos a su patrimonio, la regla general es que entran como patrimoniales, es decir, como bienes que la Administración posee igual que un particular su propiedad. Solo más tarde, mediante una afectación expresa al uso general o a un servicio público, pueden convertirse en demaniales. El nacimiento demanial no se presume ni depende del valor del bien, y no existe plazo mínimo obligatorio de permanencia.

30 **D**

Art. 55 LPAAP La potestad de recuperación posesoria permite a las Administraciones públicas recobrar por sí mismas la posesión perdida de forma indebida sobre sus bienes y derechos, sin necesidad de acudir a los tribunales ni de obtener autorización previa de otro órgano. Respecto de los bienes de dominio público esta facultad puede ejercerse en cualquier momento, mientras que en los bienes patrimoniales solo cabe dentro del plazo de un año contado desde el día siguiente a la usurpación. Se trata de una prerrogativa que refuerza la autotutela administrativa en la defensa del patrimonio.

31 **B**

Art. 3 LPAAP El patrimonio de las Administraciones Públicas comprende el conjunto de sus bienes y derechos, con independencia de su naturaleza y del título por el que se hayan adquirido o atribuido. En cambio, el dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su hacienda quedan excluidos de ese concepto. Por eso, no se incluyen todos los valores y créditos ni los recursos financieros de la hacienda.

32 **A**

Art. 8 LPAAP Los bienes patrimoniales se rigen por reglas de gestión eficiente: rentabilidad y eficacia en su explotación, identificación mediante inventarios o registros, y colaboración y coordinación entre Administraciones. La inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad son notas propias de los bienes de dominio público, no de los patrimoniales, porque protegen su afectación al uso o servicio general. Debe distinguirse: lo demanial es indisponible, mientras lo patrimonial sí puede enajenarse y se administra buscando aprovechamiento económico.

33 **A**

Art. 30 LPAAP Los bienes destinados al uso o servicio público están fuera del comercio mientras conservan ese carácter: son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Para poder venderlos hay que cambiar antes su destino mediante la desafectación, que los convierte en bienes patrimoniales. Solo una vez transformados en patrimoniales cabe enajenarlos por los procedimientos ordinarios. Sin ese paso previo, ninguna autorización, acuerdo plenario ni licitación legitima la venta de un bien demanial.

34 **D**

Art. 4 LPAAP El dominio público comprende los bienes destinados al uso general de todos o afectados a la prestación de un servicio público, además de los que la ley declara demaniales. Los bienes patrimoniales, en cambio, son aquellos que la Administración posee sin estar afectados a un uso o servicio público; se rigen por reglas similares a la propiedad privada, pueden enajenarse y embargarse. Por ello no integran el demanio, aunque también pertenezcan a la Administración titular.

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

35 **D**

Art. 51 LPAAP La potestad de deslinde permite a la Administración fijar los límites de sus bienes cuando resultan imprecisos o hay indicios de usurpación. La instrucción del procedimiento de deslinde de bienes patrimoniales estatales se atribuye a las delegaciones territoriales de economía y hacienda. La incoación corresponde a la dirección general competente en patrimonio del Estado, no al titular del ministerio. Una vez iniciado el procedimiento administrativo, queda vedado promover una acción judicial con idéntica pretensión mientras dure su tramitación. Estas reglas descartan las restantes afirmaciones propuestas.

36 **C**

Art. 41 LPAAP La facultad de expulsar por vía administrativa a quien ocupa un bien sin título válido se reserva a los bienes destinados al uso o servicio público, es decir, los de dominio público. Cuando un particular pierde la concesión o autorización que justificaba su ocupación, la Administración recupera directamente la posesión sin acudir a los tribunales. Los bienes patrimoniales, en cambio, se protegen por las vías civiles ordinarias, por lo que esta potestad de recuperación inmediata no alcanza a esa categoría.

37 **C**

Art. 15 LPAAP La norma enumera de forma tasada las vías por las que una Administración puede incorporar bienes y derechos a su patrimonio: por mandato de la ley, a título oneroso, por herencia, legado o donación, por prescripción y por ocupación. La adquisición por prescripción adquisitiva aparece nombrada como tal, mientras que el término usucapión no figura en ese listado literal. Conviene fijar el tenor exacto del precepto, pues prescripción y usucapión designan una realidad próxima, pero solo la primera consta recogida.

38 **A**

Art. 69 LPAAP Cuando un bien deja de estar destinado al uso o servicio público pierde su condición demanial, pero ese cambio no se presume: la regla general exige una declaración formal y manifiesta de la Administración, salvo los pocos supuestos que la propia ley admite de forma automática. Conviene distinguir este proceso de la afectación, que es justo el contrario: vincular el bien a una finalidad pública. Además, los bienes demaniales son de dominio público, no de naturaleza privada, y la desafectación puede reabrir el derecho de recuperación del antiguo propietario cuando hubo expropiación.

39 **B**

Art. 5 LPAAP Un bien forma parte del dominio público cuando, siendo de titularidad pública, se halla afectado al uso general de los ciudadanos o a un servicio público. La nota decisiva es esa afectación, no la mera inscripción registral ni el modo de adquisición. Cuando el bien solo produce rentas o se explota económicamente sin estar afecto a un destino público, pertenece al patrimonio privado de la Administración. Debe distinguirse, por tanto, entre la afectación a un fin público y el simple aprovechamiento económico.

40 **D**

Art. 6 LPAAP Los bienes destinados al uso general o al servicio público quedan fuera del comercio mientras conserven esa condición: no pueden venderse, no responden de deudas ni se adquieren por el paso del tiempo. Por eso afirmar que pueden enajenarse contradice su naturaleza demanial. Solo cabría su transmisión tras desafectarlos, momento en que pasan a ser bienes patrimoniales. Mientras sigan afectados al uso público, la inalienabilidad es absoluta, lo que diferencia este régimen del aplicable a los bienes patrimoniales.

MUESTRA GRATIS · Libro completo, 680 preguntas **34,90 €** **Cómpralo aquí ›**

El libro completo

Esta muestra trae los tests de los temas 1 y 2, con sus soluciones. El libro completo sigue, tema a tema, el **programa oficial de la convocatoria de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Complutense de Madrid** (solo «Bloque I: Derecho Administrativo»: 6 de los 45 temas del programa) y trae:

- **680** preguntas con su solución explicada
- **665** reales de examen
- **6** temas con su test
- **274** páginas en PDF

Además de las 665 reales, 15 preguntas de refuerzo en 2 temas sin preguntas de examen suficientes, marcadas una a una.

Parte	Qué es
Prueba tu nivel	100 preguntas en 120 minutos, como el examen de esta convocatoria, con su hoja de respuestas, sus soluciones y «Tu resultado»: por dónde empezar a estudiar.
Parte 1 · 6 tests por tema	Uno por cada tema que trae del programa oficial de la convocatoria, de 20 a 100 preguntas: 380 preguntas con sus soluciones explicadas y su casilla de aciertos.
Parte 2 · 2 simulacros	Cada uno con 100 preguntas reales en 120 minutos, como el examen de esta convocatoria, y con su hoja de respuestas y sus soluciones.
Anexo de vigencia	Las normas del libro y de dónde se ha tomado su texto.

Consigue el libro completo

Escanea el código o pulsa la dirección: te lleva a la página del libro en oposicionesexpress.com, donde lo compras y lo descargas al momento en PDF. Pago único.

oposicionesexpress.com/Test-Escala-de-Ayudantes-de-Archivos-Bibliotecas-y-Museos-Universidad-Complutense-de-Madrid-A2.html